

REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

23ª REUNIÓN — 12ª SESIÓN ORDINARIA — 19 DE JUNIO DE 1996

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación,
doctor CARLOS F. RUCKAUF

y del señor presidente provisional del Honorable Senado, doctor EDUARDO MENEM

Secretarios: doctor EDGARDO R. PIUZZI y doctora MATILDE DEL VALLE GUERRERO

Prosecretarios: señor MARIO L. PONTAQUARTO y doctor DONALDO A. DIB

PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan R.
AGÚNDEZ, Jorge A.
ALASINO, Augusto
ALMIRÓN, Carlos H.
BAUM, Daniel
BAUZÁ, Eduardo
BERHONGARAY, Antonio T.
BITTEL, Deolindo F.
BRANDA, Ricardo A.
BRAVO, Leopoldo
CABANA, Fernando V.
CAFIERO, Antonio F.
CANTARERO, Emilio M.
DE LA ROSA, Carlos L.
DE LA RÚA, Fernando
DE LA SOTA, José M.
FERNÁNDEZ de KIRCHNER, Cristina E.
FIGUEROA, José O.
GAGLIARDI, Edgardo J.
GALVÁN, Raúl A.
GENOUD, José
GIOJA, José L.
LEÓN, Luis A.
LOSADA, Mario A.
LUDUEÑA, Felipe E.
MAC KARTHY, César
MAGLIETTI, Alberto
MARANGUELLO, Pedro C.
MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique M.
MAYA, Héctor M.
MELGAREJO, Juan I.
MENEHINI, Javier R.
MENEM, Eduardo
MOREAU, Leopoldo R. G.
OUDIN, Ernesto R.

PARDO, Angel F.
PEÑA de LÓPEZ, Ana M.
QUINZIO, Bernardo P.
RIVAS, Olijela del Valle
ROMERO FERIS, José A.
SÁEZ, José M.
SALA, Osvaldo R.
SALUM, Humberto E.
SAN MILLÁN, Julio A.
SAPAG, Felipe R.
STORANI, Conrado H.
USANDIZAGA, Horacio D.
VACA, Eduardo P.
VAQUIR, Omar M.
VERNA, Carlos A.
VILLARROEL, Pedro G.
VILLASVERDE, Jorge A.
YOMA, Jorge R.
ZALAZAR, Horacio A.

AUSENTES, CON AVISO:

ANGELOZ, Eduardo C.
AVELÍN, Alfredo
COSTANZO, Remo J.
FERNÁNDEZ MEIJIDE, Graciela
HUMADA, Julio C.
LÓPEZ, Alcides H.
MANFREDOTTI, Carlos
MASSAT, Jorge
MIRANDA, Julio
OYARZÚN, Juan C.
PRETO, Ruggero
SOLANA, Jorge D.
TELL, Alberto M.

POR ENFERMEDAD:

REUTEMANN, Carlos A.

ESTA PUBLICACION CONTIENE, ADEMÁS, LA REUNION 27ª.

LAS REUNIONES 24ª, 25ª Y 26ª PERTENECEN A SESIONES EN TRIBUNAL

SUMARIO

1. Por invitación del presidente provisional del Honorable Senado el señor senador por Mendoza, doctor Eduardo Bauzá, procede al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto. (Pág. 2834.)
2. Consideración sobre tablas de los diplomas presentados por los senadores titular y suplente electos por Formosa, don Alberto Ramón Maglietti y doña Bibiana Babbini, respectivamente (O.V.-272/96). Se aprueban. (Pág. 2834.)
3. Juramento e incorporación del señor senador electo por Formosa, don Alberto Ramón Maglietti. (Pág. 2835.)
4. Homenaje al señor senador (m.c.) Pedro A. Conchez. (Pág. 2835.)
5. Asuntos entrados:
 - I. Comunicaciones de la Presidencia. (Pág. 2838.)
 - II. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación del señor Francisco J. Bullrich como embajador extraordinario y plenipotenciario (P.E.-189/96). (Página 2838.)
 - III. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre aprobación del Acuerdo Operativo Relativo a la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite (P.E.-184/96). (Pág. 2839.)
 - IV. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre aprobación del Acuerdo Marco Interregional de Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros y el Mercosur y sus Estados Partes (P.E.-185/96). (Pág. 2850.)
 - V. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre reforma de la organización del Ministerio Público (P.E.-186/96). (Pág. 2859.)
 - VI. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre aprobación del Convenio entre la Argentina y Dinamarca para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal (P.E.-190/96). (Pág. 2860.)
 - VII. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre aprobación del Convenio entre la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Capital (P.E.-191/96). (Pág. 2874.)

- VIII. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre aprobación del Convenio Interamericano sobre Permiso Internacional de Radioaficionado (P.E.-192/96). (Pág. 2887.)
- IX. Comunicaciones de la Presidencia de la Nación. (Pág. 2891.)
- X. Proyecto de ley en revisión sobre régimen legal de hábeas data (C.D.-30/96). (Pág. 2892.)
- XI. Proyecto de ley en revisión sobre modificación del régimen legal para la adquisición de automóviles para discapacitados (C.D.-31/96). (Pág. 2897.)
- XII. Proyecto de ley en revisión sobre prórroga del vencimiento de declaraciones juradas por impuestos a las ganancias y los bienes personales (C.D.-32/96). (Pág. 2898.)
- XIII. Proyecto de ley en revisión sobre modificación del Código Civil con respecto a la legibilidad de contratos de adhesión (C.D.-33/96). (Pág. 2898.)
- XIV. Proyecto de ley en revisión sobre autorización para la realización de obras de pavimentación en la ruta nacional 40 de acceso al proyecto minero Bajo de la Alumbrera, Catamarca (C.D.-34/96). (Pág. 2898.)
- XV. Proyecto de ley en revisión sobre modificación del nombre de la Academia Argentina de Farmacia y Bioquímica (C.D.-35/96). (Pág. 2899.)
- XVI. Proyecto de ley en revisión sobre tipificación del acoso sexual (C.D.-36/96). (Pág. 2899.)
- XVII. Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados. (Pág. 2899.)
- XVIII. Comunicaciones de comisiones. (Pág. 2900.)
- XIX. Comunicaciones de señores senadores. (Pág. 2900.)
- XX. Comunicaciones oficiales. (Pág. 2900.)
- XXI. Dictámenes de comisiones. (Pág. 2902.)
- XXII. Peticiones particulares. (Pág. 2907.)
- XXIII. Proyecto de comunicación de los señores senadores Sala y Mac Karthy, por el que se solicita la inclusión en el Plan Social Educativo del año 1996 a las Escuelas de Nivel Inicial y Primario Víctor Morón, Daniel Bustamante y Escuela Verde de la ciudad de Puerto Madryn, Chubut (S.-961/96). (Pág. 2907.)

- XXIV. Proyecto de ley del señor senador San Millán por el que se declara Monumento Histórico Nacional al paraje denominado Cuevas Pintadas en la localidad de Las Juntas, departamento Guachipas, Salta (S.-962/96). (Pág. 2908.)
- XXV. Proyecto de comunicación del señor senador Reutemann por el que se solicita se disponga en el marco del decreto 489/95 (Concesiones Viales) la propuesta de una autovía entre las provincias de Santa Fe y Córdoba por la ruta nacional 19 (S.-963/96). (Pág. 2909.)
- XXVI. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicita la pavimentación del acceso a la localidad de Gregoria Peres de Denis, 9 de Julio, Santa Fe (S.-964/96). (Pág. 2909.)
- XXVII. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicita se otorgue un subsidio a la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro del Barrio "El Pozo" de la ciudad de Santa Fe (S.-965/96). (Pág. 2910.)
- XXVIII. Proyecto de comunicación del señor senador Galván por el que se solicita la remoción del cargo para el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, don Guido Di Tella (S.-966/96). (Pág. 2910.)
- XXIX. Proyecto de declaración del mismo señor senador por el que se adhiere al rechazo expresado por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos contra los términos de la ley de los Estados Unidos de América de "Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba" conocida como ley Helms-Burton, aprobada el 5 de marzo de 1996 (S.-967/96). (Pág. 2911.)
- XXX. Proyecto de comunicación del señor senador Losada por el que se solicita se reglamente la ley 24.515 (Creación del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) (S.-968/96). (Pág. 2913.)
- XXXI. Proyecto de declaración del mismo señor senador por el que se repudia la posible privatización de las Centrales Nucleares de Atucha I, Atucha II y Embalse Río III (S.-969/96). (Pág. 2914.)
- XXXII. Proyecto de declaración del mismo señor senador por el que se expresa preocupación por la situación que viven los enfermos de sida en diversos penales (S.-970/96). (Pág. 2914.)
- XXXIII. Proyecto de ley de la señora senadora Fernández de Kirchner por el que se modifican los artículos 153, 154 y 155 del Código Penal por el que se incorpora la escucha o grabación telefónica como acción tipificada y reprimida (S.-971/96). (Pág. 2914.)
- XXXIV. Proyecto de resolución del señor senador Losada y otros señores senadores por el que se dispone crear la Comisión de Asesoramiento del Mercosur con carácter de permanente (S.-972/96). (Pág. 2915.)
- XXXV. Proyecto de declaración del señor senador Romero Feris por el que se adhiere al Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra el 5 de junio de cada año (S.-973/96). (Pág. 2916.)
- XXXVI. Proyecto de ley del señor senador Avelín por el que se declara de interés nacional la realización del estudio de factibilidad de un ferrocarril transpatagónico de trazado longitudinal por la zona andina (S.-975/96). (Pág. 2917.)
- XXXVII. Proyecto de ley de los señores senadores Mac Karthy y Sala por el que se incorporan dos párrafos al artículo 5º de la ley 21.608 (Y.S.M.) (Promoción Industrial) y por el que se modifica el inciso g) e incorpora otro al artículo 14 de la ley 23.658 (Bono para el Saneamiento Financiero Provincial y Reforma Fiscal), referidos a la prórroga y caducidad de los plazos previstos (S.-976/96). (Pág. 2918.)
- XXXVIII. Proyecto de comunicación del señor senador Oudín por el que se solicita se aporten los elementos que permitan instrumentar una campaña de vacunación contra la hepatitis A y B, en la ciudad de Posadas y las principales zonas de riesgo de la provincia de Misiones (S.-978/96). (Pág. 2919.)
- XXXIX. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicita se incremente el apoyo a las autoridades encargadas de controlar y prevenir los casos de rabia paresiente o parálisis en bovinos en la provincia de Misiones (S.-979/96). (Pág. 2919.)
- XL. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se modifica el artículo 1º de la ley 23.344 de restricciones en la publicidad de tabacos, haciendo extensiva a las publicidades gráficas y televisivas la leyenda advirtiendo de los peligros del hábito de fumar (S.-980/96). (Pág. 2920.)
- XLI. Proyecto de declaración del señor senador Galván por el que se rechazan

ción de la ruta nacional 9, tramo acceso a Santo Domingo, ciudad capital, Santiago del Estero, en el presupuesto 1997 (S.- 1.120/95). Se aprueba. (Página 3029.)

37. Consideración del dictamen de las comisiones de Obras Públicas y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Figueroa por el que se solicita se incluya la construcción de las obras de repavimentación de la ruta nacional 9 en el tramo límite con Córdoba- Acceso a Santo Domingo, en Santiago del Estero, en el Presupuesto 1997 (S.- 1.121/95). Se aprueba. (Página 3030.)
38. Consideración del dictamen de las comisiones de Obras Públicas, de Energía y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Sapag por el que se solicita se evite la paralización de la construcción de la represa Pichi Picún Leufú, Neuquén (S.- 1.496/95). Se aprueba. (Página 3031.)
39. Consideración del dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología, en el proyecto de declaración de la señora senadora Rivas por el que se expresa beneplácito ante la obtención del Premio Nobel de Química por los científicos Mario Molina, Frank Rowland y Paul Crutzen por sus investigaciones acerca de la capa de ozono (S.- 1.470/95). Se aprueba. (Página 3032.)
40. Consideración del dictamen de las comisiones de Ciencia y Tecnología, en el proyecto de resolución del señor senador (m.c.) Lafferrère por el que se dispone la conexión del sistema informático del Senado con la base de datos del Mercosur (S.- 1.558/95). Se aprueba. (Página 3033.)
41. Consideración del dictamen de la Comisión de Interior y Justicia en el proyecto de declaración del señor senador Ludueña por el que se rinde homenaje a la memoria de María Eva Duarte de Perón al cumplirse el 44º aniversario de su fallecimiento (S.- 575/96). Se aprueba. (Página 3033.)
42. Consideración del dictamen de la Comisión de Interior y Justicia en el proyecto de comunicación del señor senador Ludueña por el que se solicita se intensifiquen las investigaciones tendientes a identificar a los autores de la profanación de la tumba del ex presidente Juan Domingo Perón (S.- 576/96). Se aprueba. (Página 3035.)
43. Consideración del dictamen de las comisiones Asistencia Social y Salud Pública y de Agricultura y Ganadería en el proyecto de comunicación de la señora senadora Rivas por el que se solicitan informes acerca del uso de agrotóxicos fosforados en las zonas de producción tabacalera de Misiones y su posible incidencia en la salud de la población (S.- 599/96). Se aprueba. (Página 3036.)
44. Moción formulada por el señor senador Oudín para que se deje sin efecto un proyecto de su autoría re-

ferente al uso de agrotóxicos fosforados en las zonas de producción tabacalera de Misiones y su posible incidencia en la salud de la población. Se aprueba. (Página 3037.)

45. Consideración del dictamen de la Comisión de Interior y Justicia en el proyecto de comunicación del señor senador Genoud por el que se solicitan informes acerca del hallazgo de material explosivo en el Hospital Naval, por parte de la Policía Federal (S.- 616/96). Se aprueba. (Página 3037.)
46. Consideración del dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología en el proyecto de comunicación del señor senador Salum por el que se solicitan informes acerca de la política a instrumentarse en el área de ciencia y tecnología (S.- 864/96). Se aprueba. (Página 3039.)
47. Consideración del dictamen de las comisiones de Derechos y Garantías y de Asistencia Social y Salud Pública en el proyecto de comunicación del señor senador Alasino por el que se solicitan informes acerca de la muerte del joven Javier Aguirre, hecho acaecido el 11 de junio de 1995 en la ciudad de Buenos Aires (S.- 574/95). Se aprueba. (Página 3040.)
48. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios y de Interior y Justicia en el proyecto de ley en revisión sobre ejecución de la pena privativa de la libertad (C.D.-136/95). Se aprueba. (Página 3040.)
49. Manifestaciones de señores senadores con respecto a varios proyectos. Se levanta la sesión por falta de quórum. (Página 3067.)
50. Apéndice:
Sanciones del Honorable Senado. (Página 3068.)

—En Buenos Aires, a las 17 y 18 del miércoles 19 de junio de 1996:

Sr. Presidente (Menem). — La sesión está abierta.

I

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Menem). — Invito al señor senador por Mendoza doctor Eduardo Bauzá a izar la bandera nacional en el mástil del recinto, la que luego permanecerá a media asta por el fallecimiento del senador (m.c.) don Pedro Conchez.

— Puestos de pie los presentes, el señor senador Bauzá procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

2

DESIGNACION DE SENADOR NACIONAL

Sr. Presidente (Menem). — En la reunión de presidentes y bloque celebrada ayer se aprobó

3

JURAMENTO E INCORPORACION

Sr. Presidente (Menem). — El señor senador electo por Formosa don Alberto Ramón Maglietti se encuentra en las proximidades del recinto. Se lo invitará a pasar a los efectos de recibir el juramento de ley.

—Asentimiento.

—Ingresa en el recinto el señor senador electo por Formosa don Alberto Ramón Maglietti.

—Puestos de pie los presentes:

Sr. Presidente (Menem). — Señor senador electo por la provincia de Formosa don Alberto Ramón Maglietti: ¡Juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina, y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?

Sr. senador electo Maglietti. — ¡Sí, juro!

Sr. Presidente (Menem). — Si así no lo hicieris, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos. Varios señores senadores rodean y felicitan al señor senador.)

— Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Menem). — Queda incorporado el señor senador que acaba de prestar juramento.

4

HOMENAJE

Sr. Presidente (Menem). — Para rendir un homenaje al senador (m.c.) Pedro A. Conchez, tiene la palabra el señor senador por La Pampa, bloque justicialista.

Sr. Martínez Almudevar. — Señor presidente, señores senadores: hoy, en horas de la mañana, recibimos la lamentable noticia de la desaparición de un hombre sumamente apreciado y valorado en nuestra provincia; un hombre que ocupó una banca en este Senado, representándonos durante nueve años; un hombre original en toda su trayectoria de vida.

Inició su actuación en nuestra provincia como médico de pueblo; así defino a esos médicos que ejercen —y hemos ejercido— esta profesión en tantos pueblos de provincia de nuestro país.

Con esta definición trato de señalar que su desempeño ha trascendido su función y su responsabilidad profesional; inclusive, va más allá de lo

tratar como primer tema los diplomas presentados por los senadores titular y suplente electos por Formosa, don Alberto Ramón Maglietti y doña Bibiana Babbini, respectivamente.

Por Secretaría se va a dar lectura al dictamen de comisión.

Sr. Secretario (PiuZZi). — (Lee)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha considerado el expediente O.V.-272/96 Legislatura de Formosa: Comunica la designación como senador titular por dicha provincia del ciudadano Alberto Ramón Maglietti y como senador suplente a la ciudadana Bibiana Babbini; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

RESUELVE:

Artículo 1º — Aprobar los derechos y títulos de los ciudadanos Alberto Ramón Maglietti y Bibiana Babbini, como senador nacional titular y suplente respectivamente, por la provincia de Formosa, para completar el período legislativo que termina el 9 de diciembre del año 2001.

Art. 2º — Remitir las presentes actuaciones a la Secretaría Parlamentaria a sus efectos.

Art. 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De acuerdo al artículo 120 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al Orden del Día.

Sala de la comisión, 19 de junio de 1996.

Eduardo Menem. — Ricardo A. Branda.
— Horacio D. Usandizaga. — Jorge R. Yoma. — Deolindo F. Bittel. — José Genoud. — Raúl A. Galván. — Juan R. Aguirre Lanari. — Antonio T. Berhongaray. — Julio A. San Millán. — Pedro G. Villarreal.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración el tratamiento sobre tablas.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración el proyecto de resolución.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

—En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.

47

MUERTE DEL JOVEN JAVIER AGUIRRE

Sr. Presidente (Menem). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Derechos y Garantías y de Asistencia Social y Salud Pública en el proyecto de comunicación del señor senador Alasino por el que se solicitan informes acerca de la muerte del joven Javier Aguirre, hecho acaecido el 11 de junio de 1995 en la ciudad de Buenos Aires. (Orden del Día N° 542.)

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Piuizzi). — (Lee)

Dictamen de comisiones

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Derechos y Garantías, y de Asistencia Social y Salud Pública, han considerado el proyecto de comunicación del señor senador Alasino, (S-574/95), solicitando al Poder Ejecutivo nacional, que a través del organismo pertinente, informe en relación con la muerte del joven Javier Aguirre, hecho acaecido el 11 de junio de 1995, en la ciudad de Buenos Aires y por las razones que el miembro informante dará, os aconsejan su aprobación.

De acuerdo con el artículo 120 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 20 de marzo de 1996.

Mario A. Losada. — Enrique Martínez Almudear. — Humberto E. Salom. — Antonio F. Cañero. — Julio A. Miranda. — Omar M. Vaquín. — Augusto Alasino. — Alcides H. López. — Olyella del Valle Rivas. — Graciela Fernández Meijide. — Jorge D. Solana. — Conrado Storani. — Carlos H. Almiron.

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo pertinente, informe acerca de la lamentable situación que padeció el joven Javier Aguirre, en la ciudad de Buenos Aires.

Augusto J. M. Alasino.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El pasado domingo 11 de junio el joven Javier Aguirre de 18 años de edad, fue herido gravemente al resistirse a ser robado. Mientras se encontraba en grave estado,

fue asistido con un respirador manual del Hospital Ricardo Gutiérrez. Su familia solicitó la urgente asistencia a numerosos hospitales de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, denominada en lo relativo a salud como Región Sanitaria VI. Tras los sucesivos rechazos de atención médica por falta de lugar, le fue comunicada a su familia que sería aceptado en el Hospital de Clínicas, donde ante la falta del carnet de OSEAC (Obra Social de Empleados de Comercio) por involuntaria pérdida, el paciente no fue aceptado. En su nuevo peregrinar para hallar asistencia, falleció ante la impotencia de quienes lo rodeaban.

Ante estos hechos tan delicados y reiterados, que enlutan las familias argentinas, sería necesario que las autoridades informen acerca de esta lamentable situación.

Por ello, sería sumamente importante que los ciudadanos tomen conocimiento acerca de las limitaciones que se encuentran en los hospitales públicos si es que existe como requisito previo a la atención médica poseer una cobertura social determinada.

Por las razones antes expuestas, solicito la aprobación de este proyecto.

Augusto J. M. Alasino.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

— En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.

48

EJECUCION DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD

Sr. Presidente (Menem). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios y de Interior y Justicia en el proyecto de ley en revisión sobre ejecución de la pena privativa de la libertad. (Orden del Día N° 543.)

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Piuizzi). — (Lee)

Dictamen de comisiones

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios y de Interior y Justicia han considerado el proyecto de ley venido en revisión C.D.-138/95 de ejecución de la pena privativa de la libertad; y, por las razones que dará el miembro informante os aconsejan su sanción.

De conformidad con lo establecido por el artículo 120 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 21 de mayo de 1996.

Bernardo P. Quinzio. — Jorge A. Agúndez — Ernesto R. Oudin. — Jorge D. Solana. — Augusto Alasino. — Eduardo P. Vaca. — Jorge R. Yoma. — Cristina E. Fernández de Kirchner. — Raúl A. Galtón — José Genoud. — Carlos L. de la Riva. — Alcides H. López. — Olyella del Valle Rivas.

En disidencia parcial:

Pedro G. Villarreal.

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
(7 de diciembre de 1995)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,

LEY DE EJECUCION DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD

CAPÍTULO I

Principios básicos de la ejecución

Artículo 1° — La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad.

El régimen penitenciario deberá utilizar de acuerdo con las circunstancias de cada caso, todos los medios de tratamiento interdisciplinario que resulten apropiados para la finalidad enunciada.

Art. 2° — El condenado podrá ejercer todos los derechos no afectados por la condena o por la ley y las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten y cumplirá con todos los deberes que su situación le permita y con todas las obligaciones que su condición legalmente le impone.

Art. 3° — La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, estará sometida al permanente control judicial. El juez de ejecución o juez competente garantizará el cumplimiento de las normas constitucionales, los tratados internacionales ratificados por la República Argentina y los derechos de los condenados no afectados por la condena o por la ley.

Art. 4° — Será de competencia judicial durante la ejecución de la pena:

a) Resolver las cuestiones que se susciten cuando se considere vulnerado alguno de los derechos del condenado;

Los fundamentos de la disidencia se hallan después del proyecto de ley.

b) Autorizar todo egreso del condenado del ámbito de la administración penitenciaria.

Art. 5° — El tratamiento del condenado deberá ser programado e individualizado y obligatorio respecto de las normas que regulan la convivencia, la disciplina y el trabajo.

Toda otra actividad que lo integre tendrá carácter voluntario.

En ambos casos deberá atenderse a las condiciones personales, intereses y necesidades para el momento del egreso, dentro de las posibilidades de la administración penitenciaria.

Art. 6° — El régimen penitenciario se basará en la progresividad, procurando limitar la permanencia del condenado en establecimientos cerrados y promoviendo en lo posible y conforme su evolución favorable su incorporación a instituciones semiabiertas o abiertas o a secciones separadas regidas por el principio de autodisciplina.

Art. 7° — El condenado podrá ser promovido excepcionalmente a cualquier fase del período de tratamiento que mejor se adecue a sus condiciones personales, de acuerdo con los resultados de los estudios técnico-criminológicos y mediante resolución fundada de la autoridad competente.

Art. 8° — Las normas de ejecución serán aplicadas sin establecer discriminación o distingo alguno en razón de raza, sexo, idioma, religión, ideología, condición social o cualquier otra circunstancia. Las únicas diferencias obedecerán al tratamiento individualizado.

Art. 9° — La ejecución de la pena estará exenta de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Quien ordene, realice o tolere tales excesos se hará pasible de las sanciones previstas en el Código Penal, sin perjuicio de otras que le pudieran corresponder.

Art. 10. — La conducción, desarrollo y supervisión de las actividades que conforman el régimen penitenciario serán de competencia y responsabilidad administrativa, en tanto no estén específicamente asignadas a la autoridad judicial.

Art. 11. — Esta ley, con excepción de lo establecido en el artículo 7°, es aplicable a los procesados a condición de que sus normas no contradigan el principio de inocencia y resulten más favorables y útiles para resguardar su personalidad. Las cuestiones que pudieran suscitarse serán resueltas por el juez competente.

CAPÍTULO II

Modalidades básicas de la ejecución

Sección primera

Progresividad del régimen penitenciario

Períodos

Art. 12. — El régimen penitenciario aplicable al condenado, cualquiera fuera la pena impuesta, se caracterizará por su progresividad y constará de:

- a) Período de observación;
- b) Período de tratamiento;

- c) Periodo de prueba;
- d) Periodo de libertad condicional.

Periodo de observación

Art. 13. — Durante el periodo de observación el organismo técnico-criminológico tendrá a su cargo:

- a) Realizar el estudio médico, psicológico y social del condenado, formulando el diagnóstico y el pronóstico criminológico, todo ello se asentará en una historia criminológica debidamente fundada y rubricada que se mantendrá permanentemente actualizada con la información resultante de la ejecución de la pena y del tratamiento instaurado;
- b) Recabar la cooperación del condenado para proyectar y desarrollar su tratamiento. A los fines de lograr su aceptación y activa participación, se escucharán sus inquietudes;
- c) Indicar el periodo y fase de aquel que se propone para incorporar al condenado y el establecimiento, sección o grupo al que debe ser destinado;
- d) Determinar el tiempo mínimo para verificar los resultados del tratamiento y proceder a su actualización, si fuere menester.

Periodo de tratamiento

Art. 14. — En la medida que lo permita la mayor o menor especialidad del establecimiento penitenciario, el periodo de tratamiento podrá ser fraccionado en fases que importen para el condenado una paulatina atenuación de las restricciones inherentes a la pena. Estas fases podrán incluir el cambio de sección o grupo dentro del establecimiento o su traslado a otro.

Periodo de prueba

Art. 15. — El periodo de prueba comprenderá sucesivamente:

- a) La incorporación del condenado a establecimiento abierto o sección independiente de éste, que se base en el principio de autodisciplina;
- b) La posibilidad de obtener salidas transitorias del establecimiento;
- c) La incorporación al régimen de la semilibertad.

Salidas transitorias

Art. 16. — Las salidas transitorias, según la duración acordada, el motivo que las fundamente y el nivel de confianza que se adopte, podrán ser:

I. Por el tiempo:

- a) Salidas hasta doce horas;
- b) Salidas hasta veinticuatro horas;
- c) Salidas, en casos excepcionales, hasta setenta y dos horas.

II. Por el motivo:

- a) Para afianzar y mejorar los lazos familiares y sociales;
- b) Para cursar estudios de educación general básica, polimodal, superior, profesional y académica de grado o de los regímenes especiales previstos en la legislación vigente;
- c) Para participar en programas específicos de prelibertad ante la inminencia del egreso por libertad condicional, asistida o por agotamiento de condena.

III. Por el nivel de confianza:

- a) Acompañado por un empleado que en ningún caso irá uniformado;
- b) Confiado a la tutela de un familiar o persona responsable;
- c) Bajo palabra de honor.

Art. 17. — Para la concesión de las salidas transitorias o la incorporación al régimen de la semilibertad se requiere:

I. Estar comprendido en alguno de los siguientes tiempos mínimos de ejecución:

- a) Pena temporal sin la accesoria del artículo 52 del Código Penal: la mitad de la condena;
- b) Penas perpetuas sin la accesoria del artículo 52 del Código Penal: quince años;
- c) Accesoria del artículo 52 del Código Penal, cumplida la pena: 3 años.

II. No tener causa abierta donde interese su detención u otra condena pendiente.

III. Poseer conducta ejemplar o el grado máximo susceptible de ser alcanzado según el tiempo de internación.

IV. Merecer, del organismo técnico-criminológico y del consejo correccional del establecimiento, concepto favorable respecto de su evolución y sobre el efecto beneficioso que las salidas o el régimen de semilibertad puedan tener para el futuro personal, familiar y social del condenado.

Art. 18. — El director del establecimiento, por resolución fundada, propondrá al juez de ejecución o juez competente la concesión de las salidas transitorias o del régimen de semilibertad, propiciando en forma concreta:

- a) El lugar o la distancia máxima a que el condenado podrá trasladarse. Si debiera pasar la noche fuera del establecimiento, se le exigirá una declaración jurada del sitio preciso donde pernoctará;
- b) Las normas que deberá observar, con las restricciones o prohibiciones que se estimen convenientes;

- c) El nivel de confianza que se adoptará.

Art. 19. — Corresponderá al juez de ejecución o juez competente disponer las salidas transitorias y el régimen de semilibertad, precisando las normas que el condenado debe observar y efectuar modificaciones, cuando procediere. En caso de incumplimiento de las normas, el juez suspenderá o revocará el beneficio cuando la infracción fuere grave o reiterada.

Art. 20. — Concedida la autorización judicial, el director del establecimiento quedará facultado para hacer efectivas las salidas transitorias la semilibertad e informará al juez sobre su cumplimiento. El director podrá disponer la supervisión a cargo de profesionales del servicio social.

Art. 21. — El director entregará al condenado autorizado a salir del establecimiento una constancia que justifique su situación ante cualquier requerimiento de la autoridad.

Art. 22. — Las salidas transitorias, el régimen de semilibertad y los permisos a que se refiere el artículo 166 no interrumpirán la ejecución de la pena.

Semilibertad

Art. 23. — La semilibertad permitirá al condenado trabajar fuera del establecimiento sin supervisión continua, en iguales condiciones a las de la vida libre, incluso salario y seguridad social, regresando al alojamiento asignado al fin de cada jornada laboral. Para ello deberá tener asegurada una adecuada ocupación y reunir los requisitos del artículo 17.

Art. 24. — El condenado incorporado a semilibertad será alojado en una institución regida por el principio de autodisciplina.

Art. 25. — El trabajo en semilibertad será diurno y en días hábiles. Excepcionalmente será nocturno o en días domingos o feriados y en modo alguno dificultará el retorno diario del condenado a su alojamiento.

Art. 26. — La incorporación a la semilibertad incluirá una salida transitoria semanal, salvo resolución en contrario de la autoridad judicial.

Evaluación del tratamiento

Art. 27. — La verificación y actualización del tratamiento a que se refiere el artículo 13, inciso d), corresponderá al organismo técnico-criminológico y se efectuará, como mínimo, cada seis meses.

Periodo de libertad condicional

Art. 28. — El juez de ejecución o juez competente podrá conceder la libertad condicional al condenado que reúna los requisitos fijados por el Código Penal, previo los informes fundados del organismo técnico-criminológico y del consejo correccional del establecimiento. Dicho informe deberá contener los antecedentes de conducta, concepto y dictámenes criminológicos desde el comienzo de la ejecución de la pena.

Art. 29. — La supervisión del liberado condicional comprenderá una asistencia social eficaz a cargo de un patronato de liberados o de un servicio social calificado, de no existir aquél. En ningún caso se confiará a organismos policiales o de seguridad.

Sección segunda

Programa de prelibertad

Art. 30. — Entre sesenta y noventa días antes del tiempo mínimo exigible para la concesión de la libertad condicional o de la libertad asistida del artículo 54 el condenado deberá participar de un programa intensivo de preparación para su retorno a la vida libre el que, por lo menos, incluirá:

- a) Información, orientación y consideración con el interesado de las cuestiones personales y prácticas que deba afrontar al egreso para su conveniente reinserción familiar y social;
- b) Verificación de la documentación de identidad indispensable y su vigencia o inmediata tramitación, si fuere necesario;
- c) Provisiones adecuadas para su vestimenta, traslado y radicación en otro lugar, trabajo, continuación de estudios, aprendizaje profesional, tratamiento médico, psicológico o social.

Art. 31. — El desarrollo del programa de prelibertad, elaborado por profesionales del servicio social, en caso de egresos por libertad condicional o por libertad asistida, deberá coordinarse con los patronatos de liberados. En los egresos por agotamiento de la pena privativa de libertad la coordinación se efectuará con los patronatos de liberados, las organizaciones de asistencia penitenciaria y con otros recursos de la comunidad. En todos los casos se promoverá el desarrollo de acciones tendientes a la mejor reinserción social.

Sección tercera

Alternativas para situaciones especiales

Prisión domiciliaria

Art. 32. — El juez de ejecución o juez competente confiará la supervisión de la detención domiciliaria prevista en el artículo 10 del Código Penal a un patronato de liberados o servicio social calificado, de no existir aquél. En ningún caso estará a cargo de organismos policiales o de seguridad.

Art. 33. — El condenado mayor de setenta años o el que padezca una enfermedad incurable en periodo terminal, podrá cumplir la pena impuesta en detención domiciliaria, por resolución del juez de ejecución o juez competente, cuando mediare pedido de un familiar, persona o institución responsable que asuma su cuidado, previos informes médico, psicológico y social que fundadamente lo justifique.

Si lo estimare conveniente, el juez podrá disponer una supervisión adecuada en la forma prevista en el artículo 32.

Art. 34. — El juez de ejecución o juez competente revocará la detención domiciliaria cuando el condenado quebrantare injustificadamente la obligación de permanecer en el domicilio fijado o cuando los resultados de la supervisión efectuada así lo aconsejaren.

Prisión discontinua y semidetención

Art. 35. — El juez de ejecución o juez competente, a pedido o con el consentimiento del condenado, podrá disponer la ejecución de la pena mediante la prisión discontinua y semidetención, cuando:

- a) Se revocare la detención domiciliaria prevista en el artículo 10 del Código Penal;
- b) Se revocare la detención domiciliaria prevista en el artículo 33 de esta ley en el caso de condenado mayor de setenta años;
- c) Se convirtiere la pena de multa en prisión, según lo dispuesto en el artículo 21, párrafo 2º del Código Penal;
- d) Se revocare la condena condicional prevista en el artículo 26 del Código Penal por incumplimiento de las reglas de conducta establecidas en el artículo 27 bis del Código Penal;
- e) Si revocare la libertad condicional dispuesta en el artículo 15 del Código Penal, en el caso que el condenado haya violado la obligación de residencia;
- f) La pena privativa de libertad, al momento de la sentencia definitiva, no sea mayor de seis meses de efectivo cumplimiento.

Prisión discontinua

Art. 36. — La prisión discontinua se cumplirá mediante la permanencia del condenado en una institución basada en el principio de autodisciplina, por fracciones no menores de treinta y seis horas, procurando que ese período coincida con los días no laborables de aquél.

Art. 37. — El juez de ejecución o juez competente podrá autorizar al condenado a no presentarse en la institución en la que cumple la prisión discontinua por un lapso de veinticuatro horas cada dos meses.

Art. 38. — Se computará un día de pena privativa de libertad por cada noche de permanencia del condenado en la institución.

Semidetención

Art. 39. — La semidetención consistirá en la permanencia ininterrumpida del condenado en una institución basada en el principio de autodisciplina, durante la fracción del día no destinada al cumplimiento, en la medida de lo posible, de sus obligaciones familiares, laborales o educativas. Sus modalidades podrán ser la prisión diurna y la prisión nocturna.

Art. 40. — El lapso en el que el condenado esté autorizado a salir de la institución se limitará al que

le imputan las obligaciones indicadas en el artículo 39, que deberá acreditar fehacientemente.

Prisión diurna

Art. 41. — La prisión diurna se cumplirá mediante la permanencia diaria del condenado en una institución basada en el principio de autodisciplina, todos los días, entre las ocho y las diecisiete horas.

Prisión nocturna

Art. 42. — La prisión nocturna se cumplirá mediante la permanencia diaria del condenado en una institución basada en el principio de autodisciplina, entre las veintuna horas de un día y las seis horas del día siguiente.

Art. 43. — Se computará un día de pena privativa de libertad por cada jornada de permanencia del condenado en la institución conforme lo previsto en los artículos 41 y 42.

Art. 44. — El juez de ejecución o juez competente podrá autorizar al condenado a no presentarse en la institución durante un lapso no mayor de cuarenta y ocho horas cada dos meses.

Disposiciones comunes

Art. 45. — El juez de ejecución o juez competente determinará, en cada caso, mediante resolución fundada, el plan de ejecución de la prisión discontinua o semidetención, los horarios de presentación obligatoria del condenado, las normas de conducta que se compromete a observar en la vida libre y la obligación de acatar las normas de convivencia de la institución, disponiendo la supervisión que considere conveniente.

Art. 46. — En el caso del inciso f) del artículo 35, si el condenado se encontrare privado de libertad, previo a la ejecución de la resolución judicial, participará del programa de prelibertad, establecido en el artículo 30, con una duración máxima de treinta días.

Art. 47. — El condenado en prisión discontinua o en semidetención, durante su permanencia en la institución, participará en los programas de tratamiento que establezca la reglamentación, en la que se consignarán las obligaciones y limitaciones que deberá observar.

Art. 48. — El condenado podrá, en cualquier tiempo, renunciar irrevocablemente a la prisión discontinua o a la semidetención. Practicado el nuevo cómputo, el juez de ejecución o juez competente dispondrá que el resto de la pena se cumpla en establecimiento penitenciario. En tal supuesto la pena se cumplirá en establecimiento semabierto o cerrado.

Art. 49. — En caso de incumplimiento grave o reiterado de las normas fijadas de acuerdo a lo previsto en el artículo 45 y previo informe de la autoridad encargada de la supervisión del condenado, el juez de ejecución o juez competente revocará la prisión discontinua o la semidetención practicando el cómputo correspondiente. La revocación implicará el cumpli-

miento de la pena en establecimiento semabierto o cerrado.

Trabajos para la comunidad

Art. 50. — En los casos de los incisos c) y f) del artículo 35, cuando se presente ocasión para ello y el condenado lo solicite o acepte, el juez de ejecución o juez competente podrá sustituir, total o parcialmente, la prisión discontinua o la semidetención por la realización de trabajo para la comunidad no remunerado fuera de los horarios habituales de su actividad laboral comprobada. En tal caso se computarán seis horas de trabajo para la comunidad por un día de prisión. El plazo máximo para el cumplimiento de la pena con esta modalidad de ejecución será de dieciocho meses.

Art. 51. — El juez de ejecución o juez competente confiará la organización y supervisión del trabajo para la comunidad del artículo 50 a un patronato de liberados o a un servicio social calificado, de no existir aquél.

Art. 52. — En caso de incumplimiento del plazo o de la obligación fijada en el artículo 50, el juez de ejecución o juez competente revocará el trabajo para la comunidad. La revocación, luego de practicado el cómputo correspondiente, implicará el cumplimiento de la pena en establecimiento semabierto o cerrado. Por única vez y mediando causa justificada, el juez de ejecución o juez competente podrá ampliar el plazo en hasta seis meses.

Art. 53. — El condenado en cualquier tiempo podrá renunciar irrevocablemente al trabajo para la comunidad. Practicado el nuevo cómputo, el juez de ejecución o juez competente dispondrá que el resto de la pena se cumpla en prisión discontinua, semidetención o en un establecimiento penitenciario.

Sección cuarta

Libertad asistida

Art. 54. — La libertad asistida permitirá al condenado sin la accesoria del artículo 52 del Código Penal, el egreso anticipado y su reintegro al medio libre seis meses antes del agotamiento de la pena temporal.

El juez de ejecución o juez competente, a pedido del condenado y previo los informes del organismo técnico-criminológico y del consejo correccional del establecimiento, podrá disponer la incorporación del condenado al régimen de libertad asistida.

El juez de ejecución o juez competente podrá denegar la incorporación del condenado a este régimen sólo excepcionalmente y cuando considere, por resolución fundada, que el egreso puede constituir un grave riesgo para el condenado o para la sociedad.

Art. 55. — El condenado incorporado al régimen de libertad asistida deberá cumplir las siguientes condiciones:

- I. Presentarse, dentro del plazo fijado por el juez de ejecución o juez competente, al patronato de liberados que le indique para su

asistencia y para la supervisión de las condiciones impuestas.

- II. Cumplir las reglas de conducta que el juez de ejecución o juez competente fije, las cuales sin perjuicio de otras que fueren convenientes de acuerdo a las circunstancias personales y ambientales del condenado, podrán ser:

- a) Desempeñar un trabajo, oficio o profesión, o adquirir los conocimientos necesarios para ello;
- b) Aceptar activamente el tratamiento que fuere menester;
- c) No frecuentar determinadas personas o lugares, abstenerse de actividades o de hábitos que en el caso, se consideren inconvenientes para su adecuada reinserción social.

Salvo expresa indicación en contrario, siempre regirá la obligación señalada en el inciso a) de este apartado.

- III. Residir en el domicilio consignado en la resolución judicial, el que podrá ser modificado previa autorización del juez de ejecución o juez competente, para lo cual éste deberá requerir opinión del patronato respectivo.

- IV. Reparar, en la medida de sus posibilidades, los daños causados por el delito, en los plazos y condiciones que fije el juez de ejecución o juez competente.

Estas condiciones regirán a partir del día de egreso hasta el de agotamiento de la condena.

Art. 56. — Cuando el condenado en libertad asistida cometiére un delito o violare la obligación del apartado I del artículo 55, la libertad asistida será revocada.

El resto de la condena se agotará en un establecimiento semabierto o cerrado.

Si el condenado en libertad asistida incumpliere reiteradamente las reglas de conducta impuestas, violare la obligación prescrita en el apartado III del artículo 55 o se sustrajere, sin causa, a lo prescrito en el apartado IV de ese artículo, el juez de ejecución o juez competente podrá revocar su incorporación a la libertad asistida o disponer que no se le compute en la condena todo o parte del tiempo que hubiere durado la inobservancia. En tal supuesto se prorrogarán los términos, hasta tanto acatara lo dispuesto en el plazo que se le fije, bajo apercibimiento de revocatoria.

En los casos de revocatoria, deberá practicarse nuevo cómputo no considerándose el tiempo que haya durado la libertad.

Capítulo III

Normas de trato

Denominación

Art. 57. — La persona condenada o sujeta a medida de seguridad que se aloje en instituciones previstas en esta ley, se denominará interno.

Al interno se le citará o llamará únicamente por el nombre y apellido.

Higiene

Art. 58. — El régimen penitenciario deberá asegurar y promover el bienestar psicofísico de los internos. Para ello se implementarán medidas de prevención, recuperación y rehabilitación de la salud y se atenderán especialmente las condiciones ambientales e higiénicas de los establecimientos.

Art. 59. — El número de internos de cada establecimiento deberá estar preestablecido y no se lo excederá a fin de asegurar un adecuado alojamiento. Todos los locales estarán siempre en buen estado de conservación. Su ventilación, iluminación, calefacción y dimensiones guardarán relación con su destino y los factores climáticos.

Art. 60. — El aseo personal del interno será obligatorio. Los establecimientos deberán disponer de suficientes y adecuadas instalaciones sanitarias y proveerán al interno de los elementos indispensables para su higiene.

Art. 61. — El interno deberá cuidar el aseo de su alojamiento y contribuir a la higiene y conservación del establecimiento.

Alojamiento

Art. 62. — El alojamiento nocturno del interno, en lo posible, será individual en los establecimientos cerrados y semiabiertos.

En las instituciones o secciones basadas en el principio de autodisciplina se podrán utilizar dormitorios para internos cuidadosamente seleccionados.

Vestimenta y ropa

Art. 63. — La Administración proveerá al interno de vestimenta acorde al clima y a la estación, para usarla en el interior del establecimiento. En manera alguna esas prendas, por sus características, podrán resultar humillantes. Deberá cuidarse su mantenimiento en buen estado de conservación e higiene.

Cuando el interno hubiere de salir del establecimiento, en los casos autorizados, deberá permitírsele utilizar sus ropas personales. Si no dispusiere de ellas, se le facilitará vestimenta adecuada.

Art. 64. — Al interno se le proveerá de ropa suficiente para su cama individual, la que será mudada con regularidad.

Alimentación

Art. 65. — La alimentación del interno estará a cargo de la administración; será adecuada a sus necesidades y sustentada en criterios higiénico-dietéticos. Sin perjuicio de ello y conforme los reglamentos que se dicten, el interno podrá adquirir o recibir alimentos de sus familiares o visitantes. La prohibición de bebidas alcohólicas será absoluta.

Información y peticiones

Art. 66. — A su ingreso al establecimiento el interno recibirá explicación oral e información escrita acerca

del régimen a que se encontrará sometido, las normas de conducta que deberá observar, el sistema disciplinario vigente, los medios autorizados para formular pedidos o presentar quejas y todo aquello que sea útil para conocer sus derechos y obligaciones. Si el interno fuere analfabeto, presentare discapacidad física o psíquica o no comprendiese el idioma castellano, esa información se le deberá suministrar por persona y medio idóneo.

Art. 67. — El interno podrá presentar peticiones y quejas al director del establecimiento y dirigirse sin censura a otra autoridad administrativa superior, al juez de ejecución o al juez competente.

La resolución que se adopte deberá ser fundada, emitida en tiempo razonable y notificada al interno.

Tenencia y depósito de objetos y valores

Art. 68. — El dinero, los objetos de valor y demás prendas propias que el interno posea a su ingreso o que reciba con posterioridad y que reglamentariamente no pueda retener consigo serán, previo inventario, mantenidos en depósito. Se adoptarán las disposiciones necesarias para su conservación en buen estado. Conforme los reglamentos, el interno podrá disponer de su dinero y otros objetos. Los efectos no dispuestos por el interno y que no hubieren sido retenidos o destruidos por razones de higiene, le serán devueltos a su egreso. De todo depósito, disposición o devolución se extenderán las correspondientes constancias y recibos.

Cuidados de bienes

Art. 69. — El interno deberá cuidar las instalaciones, el mobiliario y los objetos y elementos que la administración destine para el uso individual o común y abstenerse de producir daño en los pertenecientes a otros internos.

Registro de internos y de instalaciones

Art. 70. — Para preservar la seguridad general, los registros en las personas de los internos, sus pertenencias y locales que ocupen, los recintos y las requisas de las instalaciones del establecimiento, se efectuarán con las garantías que reglamentariamente se determinen y dentro del respeto a la dignidad humana.

Traslado de internos

Art. 71. — El traslado individual o colectivo de internos se sustrairá a la curiosidad pública y estará exento de publicidad. Deberá efectuarse en medios de transporte higiénicos y seguros.

La administración reglamentará las precauciones que deberán utilizarse contra posibles evasiones, las cuales en ninguna circunstancia causarán padecimientos innecesarios al interno.

Art. 72. — El traslado del interno de un establecimiento a otro, con las razones que lo fundamenten, deberá ser comunicado de inmediato al juez de ejecución o juez competente.

Art. 73. — El traslado del interno de un establecimiento a otro será informado de inmediato a las personas o instituciones con las que mantuviere visita o correspondencia o a quienes hubieren sido por él designados.

Medida de sujeción

Art. 74. — Queda prohibido el empleo de esposas o de cualquier otro medio de sujeción como castigo.

Art. 75. — Sólo podrán adoptarse medidas de sujeción en los siguientes casos:

- Como precaución contra una posible evasión durante el traslado del interno;
- Por razones médicas, a indicación del facultativo, formulada por escrito;
- Por orden expresa del director o del funcionario que lo reemplace en caso de no encontrarse éste en servicio, si otros métodos de seguridad hubieran fracasado y con el único propósito de que el interno no se cause daño a sí mismo, a un tercero o al establecimiento. En este caso el director o quien lo reemplace, dará de inmediato intervención al servicio médico y remitirá un informe detallado al juez de ejecución o juez competente y a la autoridad penitenciaria superior.

Art. 76. — La determinación de los medios de sujeción autorizados y su modo de empleo serán establecidos por la reglamentación que se dicte. Su aplicación no podrá prolongarse más allá del tiempo necesario, bajo apercibimiento de las sanciones administrativas y penales que correspondan por el funcionario responsable.

Resistencia a la autoridad penitenciaria

Art. 77. — Al personal penitenciario le está absolutamente prohibido emplear la fuerza en el trato con los internos, excepto en los casos de fuga, evasión o de sus tentativas o de resistencia por la fuerza activa o pasiva a una orden basada en norma legal o reglamentaria. Aun en estos casos, todo exceso hará pasible al responsable de las sanciones administrativas y penales que correspondan.

Art. 78. — El personal que habitualmente preste servicios en contacto directo con los internos no estará armado. Deberá recibir un entrenamiento físico adecuado que le permita actuar razonable y eficazmente para superar situaciones de violencia.

El uso de armas reglamentarias quedará limitado a las circunstancias excepcionales en que sea indispensable utilizarlas con fines de prevención a por peligro inminente para la vida, la salud o la seguridad de agentes, de internos o de terceros.

CAPÍTULO IV**Disciplina**

Art. 79. — El interno está obligado a acatar las normas de conducta que, para posibilitar una ordenada

convivencia, en su propio beneficio y para promover su reinserción social, determinen esta ley y los reglamentos que se dicten.

Art. 80. — El orden y la disciplina se mantendrán con decisión y firmeza. No se impondrán más restricciones que las indispensables para mantener la seguridad y la correcta organización de la vida de los alojados, de acuerdo al tipo de establecimiento y al régimen en que se encuentra incorporado el interno.

Art. 81. — El poder disciplinario sólo puede ser ejercido por el director del establecimiento, quien tendrá competencia para imponer sanciones, suspender o dar por cumplida su aplicación o sustituirlas por otras más leves, de acuerdo a las circunstancias del caso.

Art. 82. — El reglamento podrá autorizar, con carácter restrictivo, que un miembro del personal superior legalmente a cargo del establecimiento, pueda ordenar el aislamiento provisional de internos cuando existan fundados motivos para ello, dando inmediata intervención al director.

Art. 83. — En ningún caso el interno podrá desempeñar tareas a las que vaya unido el ejercicio de una potestad disciplinaria.

Art. 84. — No habrá infracción ni sanción disciplinaria sin expresa y anterior previsión legal o reglamentaria.

Art. 85. — El incumplimiento de las normas de conducta a que alude el artículo 79, constituye infracción disciplinaria.

Las infracciones disciplinarias se clasifican en leves, medias y graves. Los reglamentos especificarán las leves y las medias.

Son faltas graves:

- Evadirse o intentarlo, colaborar en la evasión de otros o poseer elementos para ello;
- Incitar o participar en movimientos para quebrantar el orden y la disciplina;
- Tener dinero u otros valores que lo reemplacen, poseer, ocultar, facilitar o traficar elementos electrónicos o medicamentos no autorizados, estupefacientes, alcohol, sustancias tóxicas o explosivos, armas o todo instrumento capaz de atentar contra la vida, la salud o la integridad propia o de terceros;
- Intentar introducir o sacar elementos de cualquier naturaleza eludiendo los controles reglamentarios;
- Retener, agredir, coaccionar o amenazar a funcionarios u otras personas;
- Intimidar física, psíquica o sexualmente a otra persona;
- Amenazar o desarrollar acciones que sean real o potencialmente aptas para contagiar enfermedades;
- Resistir activa y gravemente al cumplimiento de órdenes legalmente impartidas por funcionario competente;
- Provocar accidentes de trabajo o de cualquier otra naturaleza;

- j) Cometer un hecho previsto como delito doloso, sin perjuicio de ser sometido al eventual proceso penal.

Art. 86. — El interno estará obligado a resarcir los daños o deterioros materiales causados en las cosas muebles o inmuebles del Estado o de terceros, sin perjuicio de ser sometido al eventual proceso penal.

Art. 87. — Sólo se podrá aplicar como sanción, de acuerdo a la importancia de la infracción cometida y a la individualización del caso, alguna de las siguientes correcciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 89:

- a) Amonestación;
- b) Exclusión de las actividades recreativas o deportivas hasta diez (10) días;
- c) Exclusión de la actividad común hasta quince (15) días;
- d) Suspensión o restricción total o parcial de derechos reglamentarios de hasta quince (15) días de duración;
- e) Permanencia en su alojamiento individual o en celda cuyas condiciones no agraven ilegítimamente la detención, hasta quince (15) días ininterrumpidos;
- f) Permanencia en su alojamiento individual o en celdas cuyas condiciones no agraven ilegítimamente la detención, hasta siete (7) fines de semana sucesivos o alternados.
- g) Traslado a otra sección del establecimiento de régimen más riguroso;
- h) Traslado a otro establecimiento.

La ejecución de las sanciones no implicará la suspensión total del derecho a visita y correspondencia de un familiar directo o allegado del interno, en caso de no contar con aquél.

Art. 88. — El sancionado con la corrección de permanencia en su alojamiento habitual no será eximido de trabajar. Se le facilitará material de lectura. Será visitado diariamente por un miembro del personal superior del establecimiento, por el capellán o ministro de culto reconocido por el Estado nacional cuando lo solicite, por un educador y por el médico. Este último informará por escrito a la dirección, si la sanción debe suspenderse o atenuarse por razones de salud.

Art. 89. — El director del establecimiento, con los informes coincidentes del organismo técnico-criminológico y del consejo correccional del establecimiento, podrá reintroducir al período o fase inmediatamente anterior al interno sancionado por falta grave o reiterada.

Art. 90. — Cuando la falta disciplinaria de motivos para sospechar la existencia de una perturbación mental en su autor, el director del establecimiento deberá solicitar asesoramiento médico, previo a la decisión del caso.

Art. 91. — El interno debe ser informado de la infracción que se le imputa, tener oportunidad de presentar sus descargos, ofrecer prueba y ser recibido en audiencia por el director del establecimiento antes de dictar

resolución, la que en todos los casos deberá ser fundada. La resolución se pronunciará dentro del plazo que fija el reglamento.

Art. 92. — El interno no podrá ser sancionado dos veces por la misma infracción.

Art. 93. — En caso de duda se estará a lo que resulte más favorable al interno.

Art. 94. — En ningún caso se aplicarán sanciones colectivas.

Art. 95. — La notificación de la sanción impuesta debe estar a cargo de un miembro del personal directivo del establecimiento. El interno será informado de sus fundamentos y alcances y exhortado a reflexionar sobre su comportamiento.

Art. 96. — Las sanciones serán recurribles ante el juez de ejecución o juez competente dentro de los cinco días hábiles, derecho del que deberá ser informado el interno al notificarse la resolución. La interposición del recurso no tendrá efecto suspensivo, a menos que así lo disponga el magistrado interviniente. Si el juez de ejecución o juez competente no se expidiese dentro de los sesenta días, la sanción quedará firme.

Art. 97. — Las sanciones y los recursos que eventualmente interpongan los sancionados, deberán ser notificados al juez de ejecución o juez competente por la vía más rápida disponible dentro de las seis horas subsiguientes a su dictado o interposición.

Art. 98. — En el supuesto de primera infracción en el establecimiento, si el comportamiento anterior del interno lo justificare, el director, en la misma resolución que impone la sanción, podrá dejar en suspenso su ejecución. Si el interno cometiere otra falta dentro del plazo prudencial que en cada caso fije el director en la misma resolución, se deberá cumplir tanto la sanción cuya ejecución quedó suspendida, como la correspondiente a la nueva infracción.

Art. 99. — En cada establecimiento se llevará un "registro de sanciones", foliado, encuadernado y rubricado por el juez de ejecución o juez competente, en el que se anotarán, por orden cronológico, las sanciones impuestas, sus motivos, su ejecución o suspensión y el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88, dejándose constancia de todo ello en el legajo personal.

CAPÍTULO V.

Conducta y concepto

Art. 100. — El interno será calificado de acuerdo a su conducta. Se entenderá por conducta la observancia de las normas reglamentarias que rigen el orden, la disciplina y la convivencia dentro del establecimiento.

Art. 101. — El interno será calificado, asimismo, de acuerdo al concepto que merezca. Se entenderá por concepto la ponderación de su evolución personal de la que sea deducible su mayor o menor posibilidad de adecuada reinserción social.

Art. 102. — La calificación de conducta y concepto será efectuada trimestralmente, notificada al interno en

la forma en que reglamentariamente se disponga y formulada de conformidad con la siguiente escala:

- a) Ejemplar;
- b) Muy buena;
- c) Buena;
- d) Regular;
- e) Mala;
- f) Pésima.

Art. 103. — La calificación de conducta tendrá valor y efectos para determinar la frecuencia de las visitas, la participación en actividades recreativas y otras que los reglamentos establezcan.

Art. 104. — La calificación de concepto servirá de base para la aplicación de la progresividad del régimen, el otorgamiento de salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, libertad asistida, conmutación de pena e indulto.

CAPÍTULO VI

Recompensas

Art. 105. — Los actos del interno que demuestren buena conducta, espíritu de trabajo, voluntad en el aprendizaje y sentido de responsabilidad en el comportamiento personal y en las actividades organizadas del establecimiento, serán estimulados mediante un sistema de recompensas reglamentariamente determinado.

CAPÍTULO VII

Trabajo

Principios generales

Art. 106. — El trabajo constituye un derecho y un deber del interno. Es una de las bases del tratamiento y tiene positiva incidencia en su formación.

Art. 107. — El trabajo se regirá por los siguientes principios:

- a) No se impondrá como castigo;
- b) No será aflictivo, denigrante, infamante ni forzado;
- c) Propenderá a la formación y al mejoramiento de los hábitos laborales;
- d) Procurará la capacitación del interno para desempeñarse en la vida libre;
- e) Se programará teniendo en cuenta las aptitudes y condiciones psicofísicas de los internos, las tecnologías utilizadas en el medio libre y las demandas del mercado laboral;
- f) Deberá ser remunerado;
- g) Se respetará la legislación laboral y de seguridad social vigente.

Art. 108. — El trabajo de los internos no se organizará exclusivamente en función del rendimiento econó-

mico individual o del conjunto de la actividad, sino que tendrá como finalidad primordial la generación de hábitos laborales, la capacitación y la creatividad.

Art. 109. — El trabajo del interno estará condicionado a su aptitud física o mental.

Art. 110. — Sin perjuicio de su obligación a trabajar, no se coaccionará al interno a hacerlo. Su negativa injustificada será considerada falta media e incidirá desfavorablemente en el concepto.

Art. 111. — La ejecución del trabajo remunerado no exime a ningún interno de su prestación personal para labores generales del establecimiento o comisiones que se le encomienden de acuerdo con los reglamentos. Estas actividades no serán remuneradas, salvo que fueren su única ocupación.

Art. 112. — El trabajo del interno estará basado en criterios pedagógicos y psicotécnicos. Dentro de las posibilidades existentes el interno podrá manifestar su preferencia por el trabajo que desee realizar.

Art. 113. — En el caso de internos que ejerciten o perfeccionen actividades artísticas o intelectuales, éstas podrán ser su única actividad laboral si fuere productiva y compatible con su tratamiento y con el régimen del establecimiento.

Formación profesional

Art. 114. — La capacitación laboral del interno, particularmente la de los jóvenes adultos, será objeto de especial cuidado.

El régimen de aprendizaje de oficios a implementar, será concordante con las condiciones personales del interno y con sus posibles actividades futuras en el medio libre.

Art. 115. — Se promoverá la organización de sistemas y programas de formación y reconversión laboral, las que podrán realizarse con la participación concertada de las autoridades laborales, agrupaciones sindicales, empresarias y otras entidades sociales vinculadas al trabajo y a la producción.

Art. 116. — Los diplomas, certificados o constancias de capacitación laboral que se expidan, no deberán contener referencias de carácter penitenciario.

Organización

Art. 117. — La organización del trabajo penitenciario, sus métodos, modalidades, jornadas de labor, horarios, medidas preventivas de higiene y seguridad, atenderán a las exigencias técnicas y a las normas establecidas en la legislación inherente al trabajo libre.

Art. 118. — La administración velará para que las tareas laborales se coordinen con los horarios destinados a otros aspectos del tratamiento del interno.

Art. 119. — El trabajo y la producción podrán organizarse por administración, bajo las formas de ente descentralizado, empresa mixta o privada, por cuenta propia del interno o mediante sistema cooperativo. En cualquiera de esas modalidades la administración ejercerá la supervisión de la actividad del interno en lo concerniente al tratamiento.

Un reglamento especial establecerá las normas regulatorias de los aspectos vinculados a la organización, funcionamiento, supervisión y evaluación de los entes oficiales, mixtos, privados o cooperativos.

Las utilidades materiales percibidas por la administración penitenciaria se emplearán exclusivamente en obras y servicios relacionados con el tratamiento de los internos.

Remuneración

Art. 120. — El trabajo del interno será remunerado, salvo los casos previstos por el artículo 111. Si los bienes o servicios producidos se destinaren al Estado o a entidades de bien público, el salario del interno no será inferior a las tres cuartas partes del salario mínimo vital móvil. En los demás casos o cuando la organización del trabajo esté a cargo de una empresa mixta o privada la remuneración será igual al salario de la vida libre correspondiente a la categoría profesional de que se trate.

Los salarios serán abonados en los términos establecidos en la legislación laboral vigente.

Art. 121. — La retribución del interno, deducidos los aportes correspondientes a la seguridad social, se distribuirá simultáneamente en la forma siguiente:

- a) 10 % para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito, conforme lo disponga la sentencia;
- b) 35 % para la prestación de alimentos, según el Código Civil;
- c) 25 % para costear los gastos que causare en el establecimiento;
- d) 30 % para formar un fondo propio que se le entregará a su salida.

Art. 122. — El salario correspondiente al interno durante la semilibertad, prisión discontinua o semidetención podrá ser percibido por la administración penitenciaria o por el propio interno. En todos los casos deberá ser aplicado al cumplimiento de lo dispuesto en los incisos 1º, 2º y 4º del artículo 11 del Código Penal.

Art. 123. — Cuando no hubiere indemnización que satisfacer, la parte que correspondiere a la misma según el artículo anterior acrecerá el porcentaje destinado a la prestación de alimentos.

Art. 124. — Si el interno no tuviere indemnización que satisfacer, ni hubiere lugar a la prestación de alimentos, los porcentajes respectivos acrecerán el fondo propio.

Art. 125. — Si el interno tuviere que satisfacer indemnización, pero no prestación alimentaria, la parte que pudiere corresponder a ésta, acrecerá el fondo propio.

Art. 126. — En los casos previstos en el artículo 122, la parte destinada para costear los gastos que el interno causara al establecimiento, acrecerá su fondo propio.

Art. 127. — La administración penitenciaria podrá autorizar que se destine como fondo disponible hasta un máximo del 30 % del fondo propio mensual, siempre que el interno haya alcanzado como mínimo la calificación de conducta buena. El fondo disponible se depositará en el establecimiento a la orden del interno para

adquisición de los artículos de uso y consumo personal que autoricen los reglamentos.

Art. 128. — El fondo propio, deducida en su caso la parte disponible que autoriza el artículo anterior, constituirá un fondo de reserva, que deberá ser depositado a interés en una institución bancaria oficial, en las mejores condiciones de plaza. Este fondo, que será entregado al interno a su egreso, por agotamiento de pena, libertad condicional o asistida, será incesible e inembargable, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 129.

Los reglamentos establecerán en casos debidamente justificados y con intervención judicial, la disposición anticipada del fondo de reserva. En el supuesto de fallecimiento del interno, el fondo de reserva será transmisible a sus herederos.

Art. 129. — De la remuneración del trabajo del interno, deducidos los aportes correspondientes a la seguridad social, podrá descontarse, en hasta un 20 % los cargos por concepto de reparación de daños intencionales o culposos causados en las cosas muebles o inmuebles del Estado o de terceros.

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

Art. 130. — La muerte o los accidentes sufridos por internos durante o con motivo de la ejecución del trabajo, así como las enfermedades profesionales contraídas por su causa, serán indemnizables conforme la legislación vigente.

Art. 131. — La indemnización, cualquiera fuere el monto de la efectiva remuneración percibida por el interno, se determinará sobre la base de los salarios fijados en los convenios o disposiciones vigentes, a la fecha del siniestro, para las mismas o similares actividades en el medio libre.

Art. 132. — Durante el tiempo que dure su incapacidad, el interno accidentado o enfermo percibirá la remuneración que tenía asignada.

CAPÍTULO VIII

Educación

Art. 133. — Desde su ingreso se asegurará al interno el ejercicio de su derecho de aprender, adoptándose las medidas necesarias para mantener, fomentar y mejorar su educación e instrucción.

Art. 134. — La enseñanza será preponderantemente formativa, procurando que el interno comprenda sus deberes y las normas que regulan la convivencia en sociedad.

Art. 135. — Se impartirá enseñanza obligatoria a los internos analfabetos y a quienes no hubieren alcanzado el nivel mínimo fijado por la ley. El director del establecimiento podrá eximir de esta obligación a quienes carecieren de suficientes aptitudes intelectuales. En estos casos, los internos recibirán instrucción adecuada, utilizando métodos especiales de enseñanza.

Art. 136. — Los planes de enseñanza corresponderán al sistema de educación pública para que el interno pueda, a su egreso, tener la posibilidad de continuar sus estudios sin inconvenientes.

Art. 137. — La administración fomentará el interés del interno por el estudio, brindándole la posibilidad de acceder a servicios educativos en los distintos niveles del sistema.

Cuando el interno no pueda seguir los cursos en el medio libre, se le darán las máximas facilidades a través de argües y ante nativos, particularmente los sistemas abiertos y a distancia.

Art. 138. — Las actividades educacionales podrán ser objeto de convenios con entidades públicas o privadas.

Art. 139. — Los certificados de estudios y diplomas extendidos por la autoridad educacional competente durante la permanencia del interno en un establecimiento penitenciario, no deberán contener ninguna indicación que permita advertir esa circunstancia.

Art. 140. — En todo establecimiento funcionará una biblioteca para los internos, adecuada a sus necesidades de instrucción, formación y recreación, debiendo estimularse su utilización.

Art. 141. — De acuerdo al tipo de establecimiento y a la categoría de los internos alojados, se organizarán actividades recreativas y culturales, utilizando todos los medios compatibles con su régimen.

Art. 142. — El tiempo libre deberá ser empleado para organizar programas de recreación con propósitos educativos, apropiados a las necesidades de los internos que aloje cada establecimiento. El programa recreativo comprenderá prácticas deportivas, preferentemente de equipo.

CAPÍTULO IX

Asistencia médica

Art. 143. — El interno tiene derecho a la salud. Deberá brindarse oportuna asistencia médica integral, no pudiendo ser interferida su accesibilidad a la consulta y a los tratamientos prescritos.

Los estudios diagnósticos, tratamientos y medicamentos indicados, le serán suministrados sin cargo.

Art. 144. — Al ingreso o reintegro del interno a un establecimiento, deberá ser examinado por un profesional médico. Este dejará constancia en la historia clínica de su estado clínico, así como de las lesiones o signos de malos tratos y de los síndromes o elicos o de ingesta de drogas, estupefacientes o cualquier otra sustancia tóxica susceptible de producir dependencia física o psíquica si los presentara.

Detectadas las anomalías aludidas, el médico deberá comunicarlas inmediatamente al director del establecimiento.

Art. 145. — La historia clínica en la que quedará registrada toda prestación médica, se completará con la incorporación de los estudios psicológico y social realizados durante el período de observación, previsto en el artículo 13, inciso a), y la actualización a que aluden el artículo 13, inciso d) y el artículo 27.

Copia de la historia clínica y de sus actualizaciones integrará la historia crimonológica.

Art. 146. — Cuando el interno ingrese o reintegrese al establecimiento con medicamentos en su poder o los reciba del exterior, el director conforme dictamen médico decidirá el uso que deba hacerse de ellos.

Art. 147. — El interno podrá ser trasladado a un establecimiento penitenciario especializado de carácter asistencial médico o psiquiátrico o a un centro apropiado del medio libre, cuando la naturaleza del caso así lo aconseje.

En el segundo de los supuestos se requerirá previa autorización del juez de ejecución o juez competente, salvo razones de urgencia. En todos los casos se comunicará la novedad de inmediato al magistrado interviniente.

Art. 148. — El interno podrá requerir, a su exclusivo cargo, la atención de profesionales privados.

La autoridad penitenciaria dará curso al pedido, excepto que razones debidamente fundadas aconsejen limitar este derecho. Toda divergencia será resuelta por el juez de ejecución o juez competente.

Art. 149. — Si el tratamiento del interno prescribiere la realización de operaciones de cirugía mayor o cualquier otra intervención quirúrgica o médica que implicaren grave riesgo para la vida o fueren susceptibles de disminuir permanentemente sus condiciones orgánicas o funcionales, deberá mediar su consentimiento o el de su representante legal y la autorización del juez de ejecución o juez competente, previo informe de peritos. En caso de extrema urgencia, bastará el informe médico, sin perjuicio de la inmediata comunicación al juez de ejecución o juez competente.

Art. 150. — Está expresamente prohibido someter a los internos a investigaciones o tratamientos médicos o científicos de carácter experimental. Sólo se permitirán mediante solicitud del interno, en enfermedades incurables y siempre que las investigaciones o tratamientos experimentales sean avalados por la autoridad sanitaria correspondiente y se orienten a lograr una mejora en su estado de salud.

Art. 151. — Si el interno se negare a ingerir alimentos, se intensificarán los cuidados y controles médicos. Se informará de inmediato al juez de ejecución o juez competente solicitando, en el mismo acto, su autorización para proceder a la alimentación forzada, cuando, a criterio médico, existiere grave riesgo para la salud del interno.

Art. 152. — Los tratamientos psiquiátricos que impliquen suspensión de la conciencia o pérdida de la autonomía psíquica, aunque fueran transitorias, sólo podrán ser realizados en establecimientos especializados.

CAPÍTULO X

Asistencia espiritual

Art. 153. — El interno tiene derecho a que se respete y garantice su libertad de conciencia y de religión, se facilite la atención espiritual que requiera y el oportuno contacto personal y por otros medios autorizados con un representante del credo que profese, reconocido e inscrito en el Registro Nacional de Cultos. Ninguna sanción disciplinaria podrá suspender el ejercicio de este derecho.

Art. 154. — El interno será autorizado, en la medida de lo posible, a satisfacer las exigencias de su vida religiosa, participando de ceremonias litúrgicas y a tener consigo objetos, libros de piedad, de moral e instrucción de su credo, para su uso personal.

Art. 155. — En cada establecimiento se habilitará un local adecuado para celebraciones litúrgicas, reuniones y otros actos religiosos de los diversos cultos reconocidos.

Art. 156. — En todo establecimiento penitenciario se celebrará el culto católico, en forma adecuada a las posibilidades edilicias de que disponga. La concurrencia a estos actos será absolutamente voluntaria.

Art. 157. — Los capellanes de los establecimientos tendrán a su cargo la instrucción religiosa y moral y la orientación espiritual de los internos, incluso de los no católicos que la aceptaren.

CAPÍTULO XI

Relaciones familiares y sociales

Art. 158. — El interno tiene derecho a comunicarse periódicamente, en forma oral o escrita, con su familia, amigos, allegados, curadores y abogados, así como con representantes de organismos oficiales e instituciones privadas con personería jurídica que se interesen por su reinserción social.

En todos los casos se respetará la privacidad de esas comunicaciones, sin otras restricciones que las dispuestas por juez competente.

Art. 159. — Los internos de nacionalidad extranjera, gozarán de facilidades para comunicarse con sus representantes diplomáticos y consulares acreditados.

Los internos nacionales de Estados sin representación diplomática o consular en el país, los refugiados y los apátridas, tendrán las mismas posibilidades para dirigirse al representante diplomático del Estado encargado de sus intereses en el país o a cualquier autoridad nacional o internacional que tenga la misión de protegerlos.

Art. 160. — Las visitas y la correspondencia que reciba o remita el interno y las comunicaciones telefónicas, se ajustarán a las condiciones, oportunidad y supervisión que determinen los reglamentos, los que no podrán desvirtuar lo establecido en los artículos 158 y 159.

Art. 161. — Las comunicaciones orales o escritas previstas en el artículo 160, sólo podrán ser suspendidas o restringidas transitoriamente, por resolución fundada del director del establecimiento, quien de inmediato, lo comunicará al juez de ejecución o juez competente. El interno será notificado de la suspensión o restricción transitoria de su derecho.

Art. 162. — El visitante deberá respetar las normas reglamentarias vigentes en la institución, las indicaciones del personal y abstenerse de introducir o intentar ingresar elemento alguno que no haya sido permitido y expresamente autorizado por el director. Si faltaren a esta prescripción o se comprobare connivencia culpable con el interno, o no guardare la debida compostura, su ingreso al establecimiento será suspendido, temporal o definitivamente, por resolución del director, la que podrá recurrirse ante el juez de ejecución o el juez competente.

Art. 163. — El visitante y sus pertenencias, por razones de seguridad, serán registrados. El registro, dentro del respeto a la dignidad de la persona humana, será realizado o dirigido, según el procedimiento previsto en los reglamentos por personal del mismo sexo del

visitante. El registro manual, en la medida de lo posible, será sustituido por sensores no intensivos u otras técnicas no táctiles apropiadas y eficaces.

Art. 164. — El interno tiene el derecho a estar informado de los sucesos de la vida nacional e internacional, por los medios de comunicación social, publicaciones o emisiones especiales permitidas.

Art. 165. — La enfermedad o accidentes graves o el fallecimiento del interno, será comunicado inmediatamente a su familia, allegados o persona indicada previamente por aquél al representante de su credo religioso y al juez de ejecución o juez competente.

Art. 166. — El interno será autorizado, en caso de enfermedad o accidente grave o fallecimiento de familiares o allegados con derecho a visita o correspondencia, para cumplir con sus deberes morales, excepto cuando se tuviesen serios y fundamentados motivos para resolver lo contrario.

Art. 167. — Los internos que no gocen de permiso de salida para afianzar y mejorar los lazos familiares podrán recibir la visita íntima de su cónyuge o, a falta de éste, de la persona con quien mantiene vida marital permanente, en la forma y modo que determinen los reglamentos.

CAPÍTULO XII

Asistencia social

Art. 168. — Las relaciones del interno con su familia, en tanto fueren convenientes para ambos y compatibles con su tratamiento, deberán ser facilitadas y estimuladas. Asimismo se lo alentará para que continúe o establezca vínculos útiles con personas u organismos oficiales o privados con personería jurídica, que puedan favorecer sus posibilidades de reinserción social.

Art. 169. — Al interno se le prestará asistencia moral y material y, en la medida de lo posible, amparo a su familia. Esta asistencia estará a cargo de órganos o personal especializado, cuya actuación podrá ser concurrente con la que realicen otros organismos estatales y personas o entidades privadas con personería jurídica.

Art. 170. — En defecto de persona allegada al interno designada como curador o susceptible de serlo, se proveerá a su representación jurídica, en orden a la curatela prevista en el artículo 12 del Código Penal.

Art. 171. — En modo particular se velará por la regularización de los documentos personales del interno. A su ingreso se le requerirá información sobre los mismos. La documentación que traiga consigo, se le restituya o se le obtenga, se depositará en el establecimiento, para serle entregada bajo constancia, a su egreso.

CAPÍTULO XIII

Asistencia pospenitenciaria

Art. 172. — Los egresados y liberados gozarán de protección y asistencia social, moral y material pospenitenciaria a cargo de un patronato de liberados o de una institución de asistencia pospenitenciaria con fines específicos y personería jurídica, procurando que no sufra menoscabo su dignidad, ni se ponga de manifiesto

su condición. Se atenderá a su ubicación social y a su alejamiento, a la obtención de trabajo, a la provisión de vestimenta adecuada y de recursos suficientes, si no los tuviere, para solventar la crisis del egreso y de pasaje para trasladarse al lugar de la República donde fije su residencia.

Art. 173. — Las gestiones conducentes al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 172, se iniciarán con la debida antelación, para que en el momento de egresar, el interno encuentre facilitada la solución de los problemas que puedan ser causa de desorientación, desubicación o desamparo. A tales efectos se le conectará con el organismo encargado de su supervisión en el caso de libertad condicional o asistida y de prestarle asistencia y protección en todas las demás formas de egreso.

CAPÍTULO XIV

Patronatos de liberados

Art. 174. — Los patronatos de liberados concurrirán a prestar la asistencia a que se refieren los artículos 168 a 170, la asistencia pospenitenciaria de los egresados, las acciones previstas en el artículo 184, la función que establecen los artículos 13 y 53 de Código Penal y las leyes 24.316 y 24.390.

Art. 175. — Los patronatos de liberados podrán ser organismos oficiales o asociaciones privadas con personería jurídica. Estas últimas recibirán un subsidio del Estado, cuya inversión será controlada por la autoridad competente.

CAPÍTULO XV

Establecimientos de ejecución de la pena

Art. 176. — La aplicación de esta ley requiere que cada jurisdicción del país, en la medida necesaria y organizados separadamente para hombres y mujeres, posea los siguientes tipos de establecimientos:

- a) Cárceles o alcáldias para procesados;
- b) Centros de observación para el estudio criminológico del condenado y planificación de su tratamiento de acuerdo con lo previsto en el artículo 13;
- c) Instituciones diferenciadas por su régimen para la ejecución de la pena;
- d) Establecimientos especiales de carácter asistencial médico y psiquiátrico;
- e) Centros para la atención y supervisión de los condenados que se encuentran en tratamiento en el medio libre y otros afines.

Art. 177. — Cada establecimiento de ejecución tendrá su propio reglamento interno, basado en esta ley, en su destino específico y en las necesidades del tratamiento individualizado que deban recibir los alojados. Contemplará una racional distribución del tiempo diario que garantice la coordinación de los medios de tratamiento que en cada caso deban utilizarse, en particular la transición en los niveles obligatorios, la

atención de las necesidades físicas y espirituales y las actividades laborales, familiares, sociales, culturales y recreativas de los internos, asegurando ocho horas para el reposo nocturno y un día de descanso semanal.

Art. 178. — Las cárceles o alcáldias tienen por objeto retener y custodiar a las personas sometidas a proceso penal. Su régimen posibilitará que el interno pueda ejercer su derecho al trabajo y afrontar la responsabilidad de asistir a su grupo familiar dependiente e incluirá programas y actividades que permitan evitar o reducir, al mínimo posible, la desocialización que pueda generar la privación de libertad.

Art. 179. — Los establecimientos destinados a procesados no podrán alojar condenados.

Art. 180. — En las cárceles y establecimientos de ejecución de la pena no se podrá recibir, bajo ningún concepto, persona alguna que no sea acompañada de una orden de detención expresa extendida por juez competente.

Art. 181. — Para la realización de las tareas técnico-criminológicas que dispone el artículo 13, según las circunstancias locales, se deberá disponer de:

- a) Una institución destinada a esa exclusiva finalidad;
- b) Una sección separada e independiente en la cárcel o alcáldia de procesados;
- c) Una sección apropiada e independiente en una institución de ejecución de la pena.

Art. 182. — Según lo requiera el volumen y la composición de la población penal y las necesidades del tratamiento individualizado de los internos, deberá constar con instituciones abiertas, semiabiertas y cerradas.

Art. 183. — Los establecimientos de carácter asistencial especializados podrán ser:

- a) Centros hospitalarios diversificados cuando sea necesario y posible;
- b) Institutos psiquiátricos.

La dirección de estos centros asistenciales sólo podrá ser ejercida por personal médico debidamente calificado y especializado.

Art. 184. — Los centros de reinserción social deben ser instituciones basadas en el principio de la autodisciplina destinado a la recepción de condenados que se encuentran en semilibertad, prisión disensiva y semilibertad. Serán dirigidos por profesionales universitarios con versación criminológica y, cuando las circunstancias lo posibiliten, podrán estar a cargo de un patronato de liberados y, de no existir aquél, de un servicio social calificado.

Art. 185. — Los establecimientos destinados a la ejecución de las penas privativas de libertad, atendiendo a su destino específico, deberán contar, como mínimo, con los medios siguientes:

- a) Personal idóneo, en particular el que se encuentra en contacto cotidiano con los internos, que deberá ejercer una actividad predominantemente educativa;

- b) Un organismo técnico-criminológico del que forme parte un equipo multidisciplinario constituido por un psiquiatra, un psicólogo y un asistente social y en lo posible, entre otros, por un educador y un abogado, todos ellos con especialización en criminología y en disciplinas afines;
- c) Servicio médico y odontológico acorde con la ubicación, tipo del establecimiento y necesidades;
- d) Programas de trabajo que aseguren la plena ocupación de los internos aptos;
- e) Biblioteca y escuela a cargo de personal docente con título habilitante, con las secciones indispensables para la enseñanza de los internos que estén obligados a concurrir a ella;
- f) Capellán nombrado por el Estado o adscrito honorariamente al establecimiento;
- g) Consejo correccional, cuyos integrantes representen los aspectos esenciales del tratamiento;
- h) Instalaciones para programas recreativos y deportivos;
- i) Locales y medios adecuados para alojar a los internos que presenten episodios psiquiátricos agudos o cuadros psicopáticos con graves alteraciones de la conducta;
- j) Secciones separadas e independientes para el alojamiento y tratamiento de internos drogadependientes;
- k) Instalaciones apropiadas para las diversas clases de visitas autorizadas.

Art. 186. — En las instituciones de ejecución no se alojarán internos comprendidos en el artículo 25 del Código Penal mientras subsista el cuadro psiquiátrico y a quienes padezcan enfermedad mental crónica. Con intervención del juez de ejecución o juez competente, serán trasladados para su atención a servicios especiales de carácter psiquiátrico o servicios u hospitales psiquiátricos de la comunidad.

Art. 187. — Los internos que padezcan enfermedades infectocontagiosas u otras patologías similares, de tal gravedad que impidan su tratamiento en el establecimiento donde se encuentran, serán trasladados a servicios especializados de carácter médico así tencial o a servicios u hospitales de la comunidad.

Art. 188. — En los programas de tratamiento de todas las instituciones y con particular énfasis en las abiertas y semia abiertas, se deberá suscitar y utilizar en la mayor medida posible los recursos de la comunidad local, cuando resulten provechosos para el futuro de los internos y compatibles con el régimen de la pena.

Art. 189. — En los establecimientos de ejecución no podrán alojarse procesados, con excepción de aquellos recibidos en virtud de sentencia definitiva y que tengan otra causa pendiente o posterior a su ingreso.

Establecimientos para mujeres

Art. 190. — Las internas estarán a cargo exclusivamente de personal femenino. Sólo por excepción

podrán desempeñarse varones en estos establecimientos en tareas específicas.

La dirección siempre estará a cargo de personal femenino debidamente calificado.

Art. 191. — Ningún funcionario penitenciario del sexo masculino ingresará en dependencias de un establecimiento o sección para mujeres sin ser acompañado por un miembro del personal femenino.

Art. 192. — En los establecimientos para mujeres deben existir dependencias especiales para la atención de las internas embarazadas y de las que han dado a luz. Se adoptarán las medidas necesarias para que el parto se lleve a cabo en un servicio de maternidad.

Art. 193. — La interna embarazada quedará eximida de la obligación de trabajar y de toda otra modalidad de tratamiento incompatible con su estado, cuarenta y cinco días antes y después del parto. Con posterioridad a dicho período, su tratamiento no interferirá con el cuidado que deba dispensar a su hijo.

Art. 194. — No podrá ejecutarse ninguna corrección disciplinaria a un juicio médico, pueda afectar al hijo en lactancia o lactante. La corrección disciplinaria será formalmente aplicada por la directora y quedará sólo como antecedente del comportamiento de la interna.

Art. 195. — La interna podrá retener consigo a sus hijos menores de cuatro años. Cuando se encuentre justificado, se organizará un jardín maternal a cargo de personal calificado.

Art. 196. — Al cumplirse la edad fijada en el artículo anterior, si el progenitor no estuviere en condiciones de haber a cargo del hijo, la administración penitenciaria dará intervención a la autoridad judicial o administrativa que corresponda.

Jóvenes adultos

Art. 197. — Los jóvenes adultos de dieciocho a veintidós años deberán ser alojados en instituciones especiales o en secciones separadas o independientes de los establecimientos para adultos. En su tratamiento se pondrá particular énfasis en la enseñanza obligatoria, en la capacitación profesional y en el mantenimiento de los vínculos familiares.

Art. 198. — Excepcionalmente y mediante los informes favorables del organismo técnico-criminológico y del consejo correccional del establecimiento, quienes hayan cumplido veintidós años podrán permanecer en instituciones o secciones especiales para jóvenes adultos hasta cumplir veinticinco años. Luego serán trasladados a un establecimiento para adultos.

Privatización parcial de servicios

Art. 199. — Cuando median fundadas razones que justifiquen la medida, el Estado podrá disponer la privatización de servicios de los establecimientos carcelarios y de ejecución de la pena, con excepción de las funciones directivas, el registro y documentación judicial del interno, el tratamiento y lo directamente referido a la custodia y la seguridad de procesados o condenados.

CAPÍTULO XVI

Personal

Personal institucional

Art. 200. — El personal de las cárceles y establecimientos de ejecución debe ser cuidadosamente seleccionado, capacitado y especializado, teniendo en cuenta la importancia de la misión social que debe cumplir.

Art. 201. — La ley y los reglamentos determinarán un adecuado régimen de selección, incorporación, retribuciones, estabilidad, asignación de funciones, ascensos, retiros y pensiones, teniendo en cuenta el riesgo, las exigencias éticas, intelectuales y físicas y la dedicación que su misión social requiere.

El contenido de esas normas legales y reglamentarias deberá considerar las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre Tratamiento de los Reclusos, las Recomendaciones de las Naciones Unidas sobre la Selección y Formación del Personal Penitenciario adoptadas en Ginebra, 1955 y la Resolución 21 A del Octavo Congreso de las Naciones Unidas, celebrado en La Habana en 1950.

Art. 202. — La conducción de los servicios penitenciarios o correccionales y la jefatura de sus principales áreas así como la dirección de los establecimientos deberán estar a cargo de personal penitenciario con título universitario de carrera afín a la función.

Art. 203. — Las funciones comprendidas en el artículo anterior se cubrirán por concurso interno. Entre los requisitos se exigirá, además, experiencia y capacitación administrativa, un adecuado perfil para el cargo y otras condiciones que fijen los reglamentos.

Cuando por dos veces consecutivas un concurso interno se declare desierto, se llamará a concurso abierto de antecedentes y oposición.

Art. 204. — En cada jurisdicción del país se organizará o facilitará la formación del personal, según los diversos roles que deba cumplir, así como su permanente actualización y perfeccionamiento profesional.

Art. 205. — Los planes y programas de enseñanza en los cursos de formación, actualización y perfeccionamiento, con contenido predominantemente criminológico, deberán incluir el estudio de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y el Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, aprobado por Resolución 34/169 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 17 de diciembre de 1979.

Personal no institucional

Art. 206. — El personal de organismos oficiales y de instituciones privadas con personería jurídica, encargados de la aplicación de las diversas modalidades de ejecución de la pena privativa de la libertad y de las no institucionales, será seleccionado y capacitado teniendo en consideración las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre Medidas no Privativas de Libertad. Reglas de Tokio 15-19.

Personal de servicios privatizados

Art. 207. — Para cumplir tareas en las cárceles o establecimientos de ejecución, las personas presentadas por el contratista de servicios privatizados deberán contar con una habilitación individual previa. Esta será concedida luego de un examen médico, psicológico y social que demuestre su aptitud para desempeñarse en ese medio.

CAPÍTULO XVII

Control judicial y administrativo de la ejecución

Art. 208. — El juez de ejecución o juez competente verificará, por lo menos semestralmente, si el tratamiento de los condenados y la organización de los establecimientos de ejecución se ajusta a las prescripciones de esta ley y de los reglamentos que en su consecuencia derive el Poder Ejecutivo. Las observaciones y recomendaciones que resulten de esas inspecciones serán comunicadas al ministerio competente.

Art. 209. — El Poder Ejecutivo dispondrá que inspectores calificados por su formación y experiencia, designados por una autoridad superior a la administración penitenciaria efectúen verificaciones, por lo menos, semestrales con los mismos propósitos que los establecidos en el artículo 208.

CAPÍTULO XVIII

Integración del sistema penitenciario nacional

Art. 210. — A los efectos del artículo 18 del Código Penal, se considerará que las provincias no disponen de establecimientos adecuados cuando los que tuvieren no se encontraran en las condiciones requeridas para hacer efectivas las normas contenidas en esta ley.

Art. 211. — El Poder Ejecutivo nacional queda autorizado a convenir con las provincias la creación de los establecimientos penitenciarios regionales que sean necesarios para dar unidad al régimen de ejecución penal que dispone esta ley.

Art. 212. — La Nación y las provincias y éstas entre sí, podrán celebrar acuerdos destinados a recibir o transferir condenados de sus respectivas jurisdicciones, a penas superiores o menores de cinco años, cuando resulte conveniente para asegurar una mejor individualización de la pena y una efectiva integración del sistema penitenciario de la República.

Art. 213. — La transferencia de internos a que se refiere el artículo 212 será a título oneroso a cargo del Estado peticionante.

Art. 214. — El gobierno nacional cuando no disponga de servicios propios, convendrá con los gobiernos provinciales, por intermedio del Ministerio de Justicia, el alojamiento de los procesados a disposición de los juzgados federales en cárceles provinciales.

Dictada sentencia definitiva y notificada, el tribunal federal, dentro de los ocho días hábiles, la comunicará al Ministerio de Justicia con remisión del testimonio de sentencia en todas sus instancias, cómputo de la

pena y fecha en que el condenado podrá solicitar su libertad condicional o libertad asistida a fin de que adopte las medidas necesarias para el cumplimiento de la pena en una institución federal.

Art. 215. — El condenado con sentencia firme trasladado a otra jurisdicción por tener causa pendiente será sometido al régimen de penados. En este caso las direcciones de los establecimientos intercambiarán documentación legal, criminológica y penitenciaria.

Art. 216. — El Ministerio de Justicia, por intermedio de la Secretaría de Política Penitenciaria y de Readaptación Social, organizará anualmente una reunión de los ministros de todo el país con competencia en la problemática carcelaria y penitenciaria. Estas reuniones tendrán por objeto evaluar todos los aspectos vinculados a la aplicación de esta ley. Podrán ser invitados representantes de instituciones oficiales y privadas que participen en la ejecución de la condenación condicional, libertad condicional, libertad asistida, semilibertad, prisión discontinua, semidetención y trabajo para la comunidad o brinden asistencia pospenitenciaria.

Art. 217. — El Ministerio de Justicia, por intermedio de la Secretaría de Política Penitenciaria y de Readaptación Social, organizará y dirigirá la compilación de la estadística nacional relativa a la aplicación de todas las sanciones previstas en el Código Penal.

A tal fin convendrá con los gobiernos provinciales el envío regular de la información.

Art. 218. — El Ministerio de Justicia, por intermedio de la Secretaría de Política Penitenciaria y de Readaptación Social, organizará un centro de información sobre los organismos estatales o instituciones privadas de todo el país vinculados a la reinserción social de los internos o al tratamiento en el medio libre.

Los patronatos de liberados y los institutos oficiales y privados deberán suministrar la información que a tales efectos se les requiera.

Art. 219. — Las provincias podrán enviar a su personal para que participe en los cursos de formación, actualización y perfeccionamiento que se realicen en el orden nacional.

CAPÍTULO XIX

Disposiciones complementarias

Suspensión de inhabilitaciones

Art. 220. — Las inhabilitaciones del artículo 12 del Código Penal quedarán suspendidas cuando el condenado se reintegre a la vida libre mediante la libertad condicional o la libertad asistida.

Transferencia internacional de la ejecución

Art. 221. — De acuerdo a lo previsto en los convenios y tratados internacionales:

- Los extranjeros condenados por los tribunales de la República podrán cumplir la pena impuesta en su país de origen;
- Los argentinos condenados en el extranjero podrán cumplir su pena en nuestro país.

Restricción documental

Art. 222. — En las actas de nacimiento, matrimonio y defunción ocurridos en un establecimiento de los previstos en esta ley no se dejará constancia alguna que permita individualizar tal circunstancia.

Suspensión de derechos

Art. 223. — En supuestos de graves alteraciones del orden en un establecimiento carcelario o de ejecución de la pena, el ministro con competencia en materia penitenciaria podrá disponer, por resolución fundada, la suspensión temporal y parcial de los derechos reconocidos a los internos en esta ley y en los reglamentos dictados en su consecuencia. Esta suspensión no podrá extenderse más allá del tiempo imprescindible para restablecer el orden alterado.

La resolución deberá ser comunicada, inmediata y fehacientemente al juez de ejecución o juez competente.

CAPÍTULO XX

Disposiciones transitorias

Art. 224. — Hasta tanto no se cuente con los centros de reinserción social a que se refiere el artículo 184, el condenado podrá permanecer en un sector separado e independiente de un establecimiento penitenciario, sin contacto alguno con otros alojados que no se encuentren incorporados a semilibertad, prisión discontinua o semidetención.

Art. 225. — Las disposiciones de los artículos 202 y 203 comenzarán a regir a partir de los diez años de la entrada en vigencia de esta ley.

La administración penitenciaria brindará el apoyo necesario para que el personal actualmente en servicio pueda reunir el requisito del título universitario en el plazo previsto en el apartado anterior, a cuyo efecto podrá celebrar convenios con universidades oficiales o privadas.

Art. 226. — Dentro de los ciento ochenta días de la vigencia de esta ley el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Justicia, procederá a revisar los convenios existentes con las provincias a fin de que puedan asumir las funciones que constitucionalmente le pertenecen respecto a los procesados y condenados por sus tribunales.

Art. 227. — El Ministerio de Justicia convocará dentro de los noventa días de la vigencia de esta ley a la primera reunión de ministros a que se refiere el artículo 216 con la finalidad de examinar los problemas que pueda suscitar su cumplimiento.

CAPÍTULO XXI

Disposiciones finales

Art. 228. — La Nación y las provincias procederán, dentro del plazo de un año a partir de la vigencia de esta ley, a revisar la legislación y las reglamentaciones penitenciarias existentes, a efectos de concordarlas con las disposiciones contenidas en la presente.

Art. 229. — Esta ley es complementaria del Código Penal.

Art. 230. — Derógase el decreto ley 412/58 ratificado por ley 14.467.

Art. 231. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ALBERTO R. PIÑERIL
Esther H. Pereyra Arandía
de Pérez Pardo.

ACLARACION

El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados, corresponde al mensaje 959 del Poder Ejecutivo del 8-7-93.

FUNDAMENTOS DE LA DISIDENCIA PARCIAL DEL SENADOR PEDRO GUILLERMO VILLARROEL

Señor presidente:

Elevo a usted mi disidencia parcial al dictamen de la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios sobre el proyecto de ley de ejecución de la pena privativa de libertad (expediente C.D.-136/95).

Más allá de la laudable motivación del proyecto y de los concretos avances con respecto al régimen vigente en materia de ejecución de penas privativas de libertad, mantenemos algunas diferencias con varias de las soluciones del texto propuesto, en algunos casos debido a su redacción y en otros casos al persistente esquema de primacía administrativa en decisiones que afectan al cumplimiento cualitativo y cuantitativo de la pena privativa de libertad. El eje principal de nuestra disidencia con el sistema de la ley es la concesión de facultades de excepción a la administración penitenciaria, sin contralor judicial suficiente, en materia de restricción de los derechos del interno. La cuestión es especialmente delicada, ya que en muchos supuestos somete el goce de los derechos fundamentales del interno a la decisión de la administración penitenciaria. Huelga señalar la potencial conflictividad de las relaciones entre la administración penitenciaria y los internos, hecho que nos inclina a preferir una ampliación de las facultades judiciales en materia de restricción de derechos.

Además de ello, señalamos como inconveniente la inclusión de principios normativos que, aunque supuestamente apuntan a guiar la actuación de la administración carcelaria, arrojan con sanciones que castigan su incumplimiento. Es el caso, por ejemplo, del límite máximo de internos por unidad penitenciaria, o bien de la necesidad de proveer alojamiento nocturno individual a los internos.

Otra de las cuestiones conflictivas es el excesivo diferimiento de facultades de reglamentación en materia de derechos fundamentales en el Poder Ejecutivo y, previsiblemente, por vía de delegación, en la propia autoridad penitenciaria.

Puntualmente, me tras observaciones a los siguientes:

Capítulo I

Artículo 2º: si bien se mencionan los derechos no afectados por la condena, debería hacerse mención expresa a los derechos emergentes de la condición de interno. Estos no se especifican claramente, ni se establece cuáles serán los mecanismos a través de los cuales los internos accederán al goce de sus derechos y obligaciones durante la privación de libertad (ver comentario artículo 66).

Artículos 3º, 4º y 10: el juego de estos artículos es confuso. Por un lado se establece la facultad judicial amplia de garantía de los derechos fundados en la Constitución y en los tratados internacionales, como de los derechos no afectados por la condena (artículo 3º). El inciso a) del artículo 4º parece coincidir con esto. Sin embargo, el artículo 10 establece la competencia administrativa amplia y la judicial restringida en lo vinculado a la conducción, desarrollo y supervisión de las actividades que conforman el régimen penitenciario. Paradójicamente, una de las funciones asignadas específicamente al juez es el contralor amplio de la ejecución de la pena cuando se considere vulnerado un derecho del interno (artículos 3º y 4º). Con lo que el artículo 10 pierde bastante sentido. Debe diferenciarse además el "régimen penitenciario" (el referido al desarrollo de la pena), que los artículos 3º y 4º asignan a la competencia judicial, en la medida en que —como se dijo— está a su cargo el cumplimiento de las normas constitucionales y de tratados internacionales, del "régimen interno del establecimiento penitenciario", que si es de competencia administrativa. Se recomienda reemplazar el artículo por el siguiente:

"La conducción y desarrollo de las actividades que conforman el régimen interno del establecimiento penitenciario serán de competencia y responsabilidad administrativa, sin perjuicio de las facultades judiciales previstas en esta ley".

Cabe agregar que gran parte de las normas de la ley referidas a restricción de derechos fundamentales (en materia de requisitos, medidas de sujeción, traslado, derecho a recibir visitas y comunicaciones, etcétera) no desarrollan coherentemente lo dispuesto por el artículo 4º, inciso a), ya que el juez en muchos de estos casos no decide sobre la situación, sino que sólo toma conocimiento una vez adoptada la medida y en consecuencia producida la restricción.

Artículo 9º: aunque se mencionen las sanciones penales, no se prevé la responsabilidad de la administración y el derecho de resarcimiento del interno en caso de incumplimiento de la norma.

Capítulo II

Artículo 14: debería darse una pauta para la reglamentación de la cantidad de fases en que se puede fraccionar el período de tratamiento, a fin de que no sean infinitas o indefinidas.

Artículo 17: se recomienda volver a la redacción del proyecto original, que fija los periodos requeridos para la obtención de salidas transitorias a un tercer caso de pena temporal, y doce años para la perpetua. El término en caso de perpetua es excesivo. En caso de penas temporales, sobre todo las cortas, en atención a la duración de la prisión preventiva, suele suceder que alcanzar las salidas transitorias se vuelve imposible. De hecho esto sucede con quien se halla condenado a penas de tres años de prisión (antes de llegar a la mitad de la condena ya obtuvo la libertad condicional).

Artículo 18: es incorrecto que sólo sea el director del establecimiento quien proponga, por resolución fundada, la concesión de las salidas transitorias o del régimen de semilibertad. Deberían poder proponerlo también el interno o su letrado.

Artículo 20: es inadmisibile que, concedida la autorización judicial, el director del establecimiento quede facultado para hacer efectivas las salidas transitorias o el régimen de semilibertad. Si el juez la autoriza, no hay razón para conceder al director discrecionalidad para llevar a cabo la medida.

Capítulo III

Artículo 59: de acuerdo a esta norma, no es posible exceder el número de internos preestablecido para un establecimiento. El principio es acertado, ya que la superpoblación es una de las principales causas de ineffectividad de los establecimientos carcelarios. Sin embargo, para que no se trate de una mera expresión de deseos, deberían establecerse:

- a) Consecuencias jurídicas —es decir, sanciones— por el incumplimiento de la norma;
- b) Legitimación amplia —de los internos, del ministerio público, de la Procuración Penitenciaria— para denunciar la situación e iniciar las acciones correspondientes;
- c) Criterios legales para adoptar decisiones —traslados, egresos, etcétera— en caso de inminencia de exceso de la capacidad establecida.

La prohibición de alojar internos en exceso debe ser absoluta.

Artículo 62: se trata de otro de los temas conflictivos. El alojamiento nocturno individual del interno debe asegurarse, no en lo posible, si no en todo caso. Sin contar con alojamiento nocturno individual, no puede ordenarse el cumplimiento de la pena, so pena de perjudicar la seguridad del condenado, del resto de los internos y del personal penitenciario. El mandato para la administración debe ser también absoluto. Se recomienda eliminar la expresión "en lo posible".

Artículo 66: es innecesaria la mención a los "medios autorizados para formular pedidos o presentar quejas", siendo de acuerdo al artículo 67 libre la posibilidad de presentar peticiones y quejas sin censura. No debe admitirse reglamentación o restricciones que den lugar a la desnaturalización del derecho de petición. Por otro lado, debe instituirse en forma obligatoria la entrega de una

"guía informativa" sobre los derechos del interno, las normas reguladoras de la vida en el establecimiento y copia del texto de la presente ley.

Artículo 67: además del director del establecimiento, la autoridad administrativa superior, el juez de ejecución o el juez competente, el interno debe poder formular sus quejas ante el procurador penitenciario y el letrado que lo asista.

Artículo 70: se trata de otro de los temas más conflictivos: el de las requisas. El artículo habla de una motivación genérica, la "seguridad general", y establece como único límite el respeto a la dignidad humana. Creemos que la norma es demasiado genérica e insuficiente, ya que delega en la reglamentación las condiciones de ejercicio de esta facultad. Para impedir que las requisas se empleen como forma de castigo u hostigamiento, la norma debería establecer al menos: las condiciones mínimas de ejercicio de la facultad, su motivación, la necesidad de su limitación al objeto establecido, sus límites espaciales y temporales y la autoridad competente para decidir su realización. Sería conveniente establecer además una clasificación —requisas ordinarias y extraordinarias.

La norma tampoco distingue entre la requisita diurna y la nocturna, tratándose de una de las intervenciones que producen mayor irritación. La situación presenta analogía con la regulación del allanamiento de domicilio, de modo que debería establecerse claramente la prohibición genérica de realizar requisas nocturnas, previniéndose —si se lo considera conveniente, de lo que discutimos— condiciones estrictas para realizarlas extraordinariamente, verbigracia, la correspondiente autorización judicial.

Todos estos detalles deben preverse en la ley de fondo, y no delegarse a la reglamentación.

Artículo 72: el artículo se refiere a la "comunicación al juez competente" para el traslado de un interno a otro establecimiento. Debería modificarse la norma, estableciéndose la necesidad de solicitar autorización al juez para disponer un traslado, en concordancia con los artículos 3º y 4º. Es menester recordar que, conforme al artículo 87 inciso h) de la ley, el traslado a otro establecimiento constituye una sanción disciplinaria.

Artículo 75: corresponde a las medidas de sujeción. El inciso b) autoriza la aplicación de medidas de sujeción para el caso de razones médicas, a indicación del facultativo del establecimiento formulada por escrito. No menciona revisión alguna por parte de otra autoridad, ni posibilidad de negarse, ni de controvertir la medida. Este argumento autorizaría, por ejemplo, a emplear chalecos de fuerza o a esposar enfermos a la cama. Estamos en contra de la ausencia de revisión.

El inciso c) deja en manos del director la determinación de la necesidad de utilizar las medidas de sujeción si considera que el interno habrá de causarse daño a sí mismo, a terceros o al establecimiento, obligándolo a remitir un informe detallado al juez de ejecución o al juez competente. Debe establecerse la preponderancia de la comunicación, bajo pena de nulidad.

19 de junio de 1996

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

3059

Artículo 76: Se delega en la reglamentación la determinación de los medios de sujeción autorizados y su modo de empleo, hecho que consideramos incorrecto, ya que por tratarse de una reglamentación que afecta a derechos fundamentales debe realizarse por ley de fondo. La aplicación del medio de sujeción "no podrá prolongarse más allá del tiempo necesario": esto parece una nueva expresión de deseos, sin siquiera establecerse pautas mínimas para su control o revisión.

Artículo 78: debería agregarse expresamente que el uso de armas fuera de los casos autorizados dará lugar a las acciones disciplinarias, acciones administrativas y penales correspondientes.

Capítulo IV

Artículo 82: autoriza a una autoridad penitenciaria inferior al aislamiento provisional de internos, sin establecer plazos perentorios ni confirmación por el juez competente, como contrapeso de la medida restrictiva. Resulta entonces más fácil para la autoridad penitenciaria acudir al aislamiento que llevar a cabo el trámite previsto para la aplicación de medidas de sujeción (artículo 74). Se recomiendan requisitos similares a los de dicha norma, amén de establecerse un plazo perentorio infranqueable. De acuerdo al informe de la autoridad del Ministerio de Justicia que propone el proyecto, no se trata del "aislamiento" como castigo, sino de la separación física del interno con respecto a otros como medida de protección en caso de conflicto. Este sentido no surge claramente del texto, y da pie para interpretar la autorización como medida de castigo. El propio término empleado ("aislamiento") coincide con el utilizado para describir actualmente las celdas de castigo ("celdas de aislamiento").

Artículo 85: Delega en la administración la definición de las faltas leves y medias, hecho especialmente grave ya que no se establece claramente cuál es la autoridad reglamentaria (ministerio?, administración penitenciaria?, administración de cada establecimiento?). Nótese que la norma habla de "reglamentos" y no de reglamentación. El cuadro se agrava aún más cuando en muchos casos las faltas graves detalladas constituyen delitos de acción pública (incisos e), f), g) y h), amén de la previsión genérica de i), y varios más pueden llegar a constituirlos (vervigilancia incisos c), d) e i), de modo que el margen para establecer faltas medias es muy grande. La previsión de delitos como faltas trae también problemas vinculados a la presunción de inocencia y a la prohibición de doble persecución.

Artículo 87: Las sanciones son en general muy graves. Se recomienda una reducción de los incisos c) y d) de quince a diez días. No queda claro en qué consisten las sanciones de los incisos c) y d), que requerirían mayor detalle. ¿Cuáles son, por ejemplo, los derechos que pueden suspenderse o restringirse? Por último, el traslado a otro establecimiento requeriría una fundamentación especial, tal cual surge del artículo 72.

Artículo 91: no se establece expresamente la posibilidad de recibir asistencia letrada. Esto es de fundamental importancia por la incidencia que tienen las sancio-

nes sobre el régimen de beneficios. Tampoco se establece plazo, que queda librado a la reglamentación. Esto es incorrecto.

Artículo 96: la interposición del recurso carece de efecto suspensivo, que dependerá de la decisión del juez. Estamos en desacuerdo con esta solución. No se explica el motivo. La regla debería ser el efecto suspensivo ya que de lo contrario, hecha efectiva la privación de derechos, la revocación judicial de la sanción no repara el daño. Si se le da plazo de resolución al director del establecimiento, no se ve qué pueda impedir esperar hasta la resolución judicial para aplicar la sanción. Es injusto además perjudicar al sancionado con la eventual demora en la resolución judicial. El plazo concedido al juez para resolver (60 días) es excesivamente largo, y para colmo su inactividad causa la firmeza de la sanción. Esto es injustificable. Por último, si se pretende aplicar medidas de restricción provisionales, ya hemos visto que la autoridad penitenciaria cuenta con facultades suficientes para imponerlas con relativa discrecionalidad (cfr. artículos 74 y 82).

Capítulo VII

Artículo 111: Establece que los labores generales del establecimiento o comisiones especiales que se le encomiendan al interno de acuerdo a los reglamentos no serán remunerados, excepto que constituyan la única ocupación del interno. La norma constituye una invitación a emplear gratuitamente a los internos, bajo la excusa de "labores generales del establecimiento". Únicamente se justifica eximir de remuneración a la labor de aseo e higiene del lugar de alojamiento del interno.

Capítulo IX

Artículo 147: La redacción del segundo párrafo es ambigua, ya que no se sabe cuándo se requiere la autorización judicial (cuando se lo traslade a un centro apropiado del medio libre, o cuando se lo traslade a un establecimiento psiquiátrico?). Si se tratare de la primera solución —de acuerdo a lo expresado por la respuesta del Ministerio de Justicia—, merece nuestra crítica, ya que, dados los valores en juego, el traslado a un establecimiento psiquiátrico debe requerir siempre autorización judicial (cfr. artículo 34, inciso 1, segundo párrafo del Código Penal, artículo 482, Código Civil, o bien ley 22.914). No se habla tampoco de la posibilidad de recurrir la medida, ni de los requisitos que deba reunir la medida. Conviene aclarar la redacción del artículo, para saber a qué caso se refiere.

Artículo 151: Impone la alimentación forzada en caso de huelga de hambre. Esto es incompatible con el artículo 19 de la Constitución Nacional.

Artículo 152: Admite la posibilidad de que se apliquen tratamientos que impliquen la suspensión de la conciencia o pérdida de la autonomía psíquica, sin requerir el consentimiento del interno, ni establecer la posibilidad de recurrir la medida. Esto autorizaría la aplicación del electroshock o de neurolepticos a personas capaces sin mayor control que el hecho de darse en establecimientos especializados. Es necesario la...

Con criterio realista se aleja de contener una formulación teórica, respondiendo a una sentida necesidad de la sociedad que imperativamente demanda una reformulación de la ejecución de la pena privativa de la libertad. En efecto, hoy la sociedad exige y reclama que la pena y sus resultados signifiquen un aporte sustancial a la seguridad ciudadana. Y este proyecto da respuesta a los reiterados reclamos de especialistas e incluso de la misma población penal; confirma una profunda concepción humanista, respetuosa de los derechos humanos y, como tal, confía en la perfectibilidad del hombre y en que entre las personas que se encuentran cumpliendo penas pri-

vativas de libertad existen muchas que auténticamente desean reintegrarse a la sociedad como personas útiles y alejadas del delito.

En este aspecto, esta iniciativa se alinea en una dirección que guarda el equilibrio entre la seguridad de la comunidad y los derechos de los internos, en la convicción de que aquélla seguramente se alcanzará con mayores posibilidades de éxito si logramos darle a la pena privativa de libertad un verdadero sentido pedagógico.

El proyecto en consideración prevé un tratamiento basado en la progresividad del régimen penitenciario, respetando el criterio vigente hoy en la ley penitenciaria nacional, sustentando como premisas básicas del mismo la programación previa y la individualización del tratamiento, y privilegiando el tránsito pautado y continuo desde establecimientos cerrados a abiertos, incorporando, a su vez, alternativas novedosas como el programa de prelibertad y el instituto de la libertad asistida.

Incorpora este proyecto otros aspectos que tradicionalmente han sido objeto de atención dentro de las penas privativas de libertad, como ser la asistencia espiritual y médica, la educación con criterios actuales —según las propuestas de la ley federal de educación—, y la diversidad de establecimientos con perfiles específicos en su consideración, para aquellos que se destinan al alojamiento de mujeres y jóvenes adultos.

En el caso de las primeras se agregan normativas puntuales para el régimen de las madres detenidas alojadas con sus hijos, extendiendo la edad de éstos de dos a cuatro años, como límite máximo de permanencia junto a la madre que cumple pena privativa de libertad.

El proyecto, al que la comisión dio tratamiento durante un tiempo prolongado, fue acompañado por un aporte documental de material de distinta naturaleza que la comisión consultó, con la referencia y la concordancia que integran un trabajo bibliográfico de 706 fojas, que contienen el detalle del proyecto artículo por artículo, junto con una guía para ordenar y facilitar la búsqueda de las cincuenta fuentes consultadas.

El Capítulo I, "Principios Básicos de la Ejecución", contiene lo medular de este proyecto, brindando el marco conceptual y la fundamentación ético-jurídica del sistema de ejecución de pena privativa de libertad que se pretende implementar. Determina que la ejecución de esta pena en todas sus modalidades es lograr que el condenado adquiera la capacidad para com-

prender y respetar la ley. Este objetivo primordial desde el punto de vista ético, social y jurídico se complementa, como antes lo he expresado, con el de lograr la adecuada reinserción social del condenado. Para hacer ello posible ratifica la necesidad del apoyo de la sociedad y la importancia de aplicar un régimen penitenciario que incluya todos los sistemas de tratamiento interdisciplinarios apropiados a ese fin.

Reconoce al condenado sus derechos inalienables derivados del principio constitucional de reserva, sin perjuicio del cumplimiento de los deberes que su situación le permita y que su condición legalmente le impone; es decir, el respeto de los derechos no afectados específicamente por la condena.

Incorpora por primera vez el tratamiento en forma programada individualizada y obligatoria sólo en lo que hace a la convivencia, la disciplina y el trabajo, siendo toda otra actividad que lo integre de carácter voluntario.

Sienta la progresividad del régimen penitenciario promoviendo, en lo posible, la incorporación del condenado a instituciones semiabiertas o abiertas o a secciones separadas regidas por el principio de autodisciplina, lo cual supone un tratamiento individualizado y sin discriminación de ningún tipo, señalándose que la ejecución de la pena estará exenta de tratos crueles, inhumanos y degradantes, siendo pasible de otras sanciones, aparte de las previstas en el Código Penal, quien ordene, realice o tolere excesos.

Delimita claramente la competencia y responsabilidad administrativa de quien tiene a su cargo la conducción, el desarrollo y la supervisión de las actividades penitenciarias, en tanto no estén específicamente asignadas a la autoridad judicial.

Finalmente, extiende la aplicación del ordenamiento a los procesados en tanto no contradiga el estado de inocencia y resulte más favorable y útil para resguardar su personalidad, siempre bajo el control judicial.

El capítulo II, modalidades básicas de la ejecución, consta de cuatro secciones: "Progresividad del Régimen Penitenciario"; "Programa de Prelibertad"; "Alternativas para Situaciones Especiales" y "Libertad Asistida". A partir de este capítulo, comienza la regulación en los aspectos operativos, para lo cual se ha tenido fundamentalmente en cuenta lo que aconseja la experiencia propia e internacional para la introducción de innovaciones. Como característica determinante, las modalidades parten de la privación de la libertad a su restricción.

Así, en la primera sección, la progresividad prevé, cualquiera fuese la pena impuesta, cuatro periodos: de observación, de tratamiento, de prueba y de libertad condicional. También se regulan en el proyecto las salidas transitorias según tiempo, motivo y nivel de confianza y su otorgamiento por resolución judicial, como asimismo el mejoramiento del régimen de semilibertad.

La sección segunda "Programa de Prelibertad", apunta a la reinserción del condenado en la sociedad, analizando y procurando resolver las cuestiones más acuciantes que deberá afrontar al egresar.

La tercera —"Alternativas para Situaciones Especiales"— importa una novedad. Sus numerosos artículos —veintidós en total— constituyen un catálogo de modalidades que rigen en otros países y su aplicación resultará una experiencia valiosa para cuando se disponga su incorporación como sanciones autónomas, mentalizándose a la sociedad y capacitándose al personal penitenciario. Este proyecto también reformula la prisión domiciliaria y crea las siguientes formas de prisión: discontinua, de semidetención y de trabajos comunitarios.

La cuarta sección —"Libertad Asistida"— importa un régimen facultativo de egreso anticipado con supervisión y asistencia similares a las de la libertad condicional.

El artículo 33 del presente proyecto permite, por ejemplo, que el condenado mayor de setenta años o que padezca una enfermedad incurable en período terminal pueda cumplir la pena en detención domiciliaria mediante resolución del juez de ejecución o juez competente, recepcionando así un criterio jurisprudencial que viene insinuándose en estos últimos tiempos y que a partir de la vigencia de la presente será una solución legal.

El capítulo III regula todo lo relativo a normas de trato tales como denominación del interno, higiene, alojamiento, vestimenta y ropa, alimentación, información y peticiones, tenencia y depósito de bienes y valores, cuidado de bienes, registros de internos y de instalaciones, traslados, medidas de sujeción y resistencia a la autoridad penitenciaria. Cabe destacar que esta iniciativa prohíbe la censura en las peticiones y quejas de los internos que realicen tanto a la autoridad administrativa como a la judicial.

El capítulo IV se ocupa de la disciplina y se establece el principio de legalidad: "No habrá infracción ni sanción disciplinaria sin expresa y anterior previsión legal o reglamentaria", según lo dispone el artículo 84.

Expresamente, también se consagran los principios "Non bis in idem" y el del beneficio de la duda en favor del interno. Se prohíben las sanciones colectivas y se establece y garantiza la recurribilidad de las sanciones ante la autoridad judicial competente y el ejercicio del derecho de defensa.

El capítulo V —"Conducta y Concepto"— mantiene los principios y normas del régimen actual y formula precisiones que perfeccionan aspectos conceptuales, distinguiendo los efectos entre la calificación de conducta y concepto.

En el capítulo VI se prevé el establecimiento de "recompensas" cuyo régimen será determinado reglamentariamente.

El trabajo de los internos es, según el proyecto, un derecho y un deber para ellos y una de las bases del tratamiento que tiene positiva incidencia en su formación. De ello se ocupa el capítulo VII, donde se contempla todo lo relativo al trabajo del interno, los principios generales, el respeto de las normas laborales, de seguridad y de previsión social, la organización, remuneración, formación profesional, etcétera.

El capítulo VIII se ocupa de la educación del interno, adecuándola a la Ley Federal de Educación y su normativa se orienta a mejorar las posibilidades de reinserción social.

En el capítulo IX —"Asistencia Médica"— se consagra todo lo relativo a la salud de los internos, desde la prevención al tratamiento. También se atiende a la parte espiritual y a las relaciones familiares y sociales, aspectos previstos en otros capítulos. Se prohíbe el sometimiento a investigaciones o tratamientos experimentales, salvo cuando mediare solicitud del interno y, en ese caso, bajo rigurosas condiciones.

Bajo el título "Asistencia Espiritual", el capítulo X garantiza la libertad de culto y el ejercicio de ese derecho, mientras que lo relativo a las relaciones familiares y sociales se contempla en el capítulo XI, reconociéndose los derechos a la comunicación con familiares, abogados, etcétera y, en el caso de extranjeros, con representantes diplomáticos del país de origen, a la inviolabilidad de las comunicaciones orales y escritas y a los requisitos y garantías de respeto para los visitantes.

En los tres capítulos siguientes —XII, XIII y XIV, de "Asistencia Social", "Asistencia Post-Penitenciaria" y "Patronato de Liberados", respectivamente— se mantienen los principios del régimen vigente con adecuaciones a las nuevas leyes relacionadas con la materia.

Así, en la primera sección, la progresividad prevé, cualquiera fuese la pena impuesta, cuatro períodos: de observación, de tratamiento, de prueba y de libertad condicional. También se regulan en el proyecto las salidas transitorias según tiempo, motivo y nivel de confianza y su otorgamiento por resolución judicial, como asimismo el mejoramiento del régimen de semilibertad.

La sección segunda "Programa de Pre-libertad", apunta a la reinserción del condenado en la sociedad, analizando y procurando resolver las cuestiones más acuciantes que deberá afrontar al egresar.

La tercera — "Alternativas para Situaciones Especiales" — importa una novedad. Sus numerosos artículos — veintidós en total — constituyen un catálogo de modalidades que rigen en otros países y su aplicación resultará una experiencia valiosa para cuando se disponga su incorporación como sanciones autónomas, mentalizándose a la sociedad y capacitándose al personal penitenciario. Este proyecto también reformula la prisión domiciliaria y crea las siguientes formas de prisión: discontinua, de semidetención y de trabajos comunitarios.

La cuarta sección — "Libertad Asistida" — importa un régimen facultativo de egreso anticipado con supervisión y asistencia similares a las de la libertad condicional.

El artículo 33 del presente proyecto permite, por ejemplo, que el condenado mayor de setenta años o que padezca una enfermedad incurable en período terminal pueda cumplir la pena en detención domiciliaria mediante resolución del juez de ejecución o juez competente, recepcionando así un criterio jurisprudencial que viene insinuándose en estos últimos tiempos y que a partir de la vigencia de la presente será ya una solución legal.

El capítulo III regula todo lo relativo a normas de trato tales como denominación del interno, higiene, alojamiento, vestimenta y ropa, alimentación, información y peticiones, tenencia y depósito de bienes y valores, cuidado de bienes, registros de internos y de instalaciones, traslados, medidas de sujeción y resistencia a la autoridad penitenciaria. Cabe destacar que esta iniciativa prohíbe la censura en las peticiones y quejas de los internos que realicen tanto a la autoridad administrativa como a la judicial.

El capítulo IV se ocupa de la disciplina y se establece el principio de legalidad: "No habrá infracción ni sanción disciplinaria sin expresa y anterior previsión legal o reglamentaria", según lo dispone el artículo 81.

Expresamente, también se consagran los principios "*Non bis in idem*" y el del beneficio de la duda en favor del interno. Se prohíben las sanciones colectivas y se establece y garantiza la recurribilidad de las sanciones ante la autoridad judicial competente y el ejercicio del derecho de defensa.

El capítulo V — "Conducta y Concepto" — mantiene los principios y normas del régimen actual y formula precisiones que perfeccionan aspectos conceptuales, distinguiendo los efectos entre la calificación de conducta y concepto.

En el capítulo VI se prevé el establecimiento de "recompensas" cuyo régimen será determinado reglamentariamente.

El trabajo de los internos es, según el proyecto, un derecho y un deber para ellos y una de las bases del tratamiento que tiene positiva incidencia en su formación. De ello se ocupa el capítulo VII, donde se contempla todo lo relativo al trabajo del interno, los principios generales, el respeto de las normas laborales, de seguridad y de previsión social, la organización, remuneración, formación profesional, etcétera.

El capítulo VIII se ocupa de la educación del interno, adecuándola a la Ley Federal de Educación y su normativa se orienta a mejorar las posibilidades de reinserción social.

En el capítulo IX — "Asistencia Médica" — se consagra todo lo relativo a la salud de los internos, desde la prevención al tratamiento. También se atiende a la parte espiritual y a las relaciones familiares y sociales, aspectos previstos en otros capítulos. Se prohíbe el sometimiento a investigaciones o tratamientos experimentales, salvo cuando mediare solicitud del interno y, en ese caso, bajo rigurosas condiciones.

Bajo el título "Asistencia Espiritual", el capítulo X garantiza la libertad de culto y el ejercicio de ese derecho, mientras que lo relativo a las relaciones familiares y sociales se contempla en el capítulo XI, reconociéndose los derechos a la comunicación con familiares, abogados, etcétera y, en el caso de extranjeros, con representantes diplomáticos del país de origen, a la inviolabilidad de las comunicaciones orales y escritas y a los requisitos y garantías de respeto para los visitantes.

En los tres capítulos siguientes — XII, XIII y XIV, de "Asistencia Social", "Asistencia Post-Penitenciaria" y "Patronato de Liberados", respectivamente — se mantienen los principios del régimen vigente con adecuaciones a las nuevas leyes relacionadas con la materia.

sido muy responsable y meditado y se han discutido con amplitud las propuestas hechas por nuestra parte, me parece que sería una pretensión inoficiosa querer aquí, en este debate, lograr alguna modificación de los textos que vienen en el proyecto.

De tal manera que, desde luego, mantengo esta disidencia parcial con la esperanza de que en la reglamentación — y hay muchos aspectos que quedan diferidos a ella — se reciban algunas de estas observaciones y pueda lograrse un mejor final para este régimen jurídico de la ejecución de las penas privativas de la libertad.

Con esto doy por finalizada mi intervención, no sin antes decir — aunque no sea usual — que, en rigor, la tarea más pesada en la elaboración de estas disidencias parciales ha corrido por cuenta de un colaborador de mi despacho, que es un entusiasta y reflexivo investigador de estos temas, el doctor Courtis.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis, bloque Unión Cívica Radical.

Sr. Agúndez. — Señor presidente: este proyecto de ejecución de la pena privativa de la libertad, que reemplaza en su totalidad al decreto 412/58, ratificado por la ley 14.467 — Ley penitenciaria nacional — viene con sanción de la Cámara de Diputados. Este proyecto del Poder Ejecutivo nacional fue modificado en algunos aspectos por la Cámara de Diputados y casi por unanimidad fue aprobado.

En el mismo sentido se procedió en la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios de este Senado. Los lineamientos generales fueron todos consensuados, y después de un exhaustivo análisis y consultas hechas a los funcionarios del área consideramos que éste es un proyecto que, si bien no es óptimo como pretendíamos, debe ser el mejor que existe dentro de los proyectos del sistema de la ejecución de las penas.

Nosotros habíamos formulado ciertas observaciones, sobre todo algunas que no hacen a los lineamientos básicos de este proyecto. En realidad también habíamos consensuado con los integrantes de la comisión, como bien dijo el senador Villarroel, que se debería considerar a reglamentación de algunos aspectos de esta ley o, en su defecto, si fuera posible, hacer algunas modificaciones o correcciones a la ley mediante un proyecto distinto más adelante, una vez que la implementación de estas normas así lo determinara.

Para no reiterar conceptos del miembro informante, que hemos ratificado en su totalidad y han sido bien puntualizados, nosotros adelantamos el voto positivo de la bancada de la Unión Cívica Radical porque creemos que en esta crisis del sistema carcelario es necesario contar con un proyecto que no solamente sea bueno, sino que, además sea oportuno en el tiempo.

Allí reside el apuro que tuvo la comisión, no obstante haber tratado durante bastante tiempo este proyecto.

Pero quería puntualizar simplemente — para abreviar — algunos aspectos fundamentales que hacen a esta ley.

En primer lugar, el proyecto tiene como objetivo principal la garantía de la legalidad en la ejecución de la pena. En segundo término, y es digno de destacar, respeta los principios constitucionales sobre la materia y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que hoy es norma constitucional por la reforma de 1994.

En tercer lugar, consagra — y esto es lo importante — el pleno contralor jurisdiccional de la ejecución.

El cuarto motivo de esta puntualización es que el proyecto guarda un equilibrio entre la seguridad de la comunidad y los derechos de los internos.

Quinto, contempla cuatro derechos fundamentales, que hacen al hombre, en este caso al interno y a su formación. Se trata del derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la libertad de conciencia y a la religión.

Estos son los cinco pilares fundamentales por los que acompañamos este proyecto de ley.

Ha habido objeciones o, mejor dicho, reservas respecto de la iniciativa. Algunas fueron aclaradas por el senador Villarroel y otras se podrían dilucidar en el tratamiento en particular de este proyecto. Entre ellas tenemos, y es digno de mencionar en el tratamiento en general, algunos artículos, fundamentalmente los que podrían ser intrusivos para las provincias, como son los artículos 210, 211, 228 y 229 de la norma, por interesar — decían algunos — poderes no delegados al gobierno nacional; no obstante — y esto es muy importante — que se considera al proyecto de fundamental interés, sobre todo por la incorporación de medidas alternativas a la pena privativa de la libertad.

Respecto de las reservas formuladas, podemos decir que el artículo 210 de la iniciativa corresponde al artículo 122 del actual régimen penitenciario; el 211 corresponde al 123 en vigencia,

el artículo 228, al 132 actual y, por último, el artículo 229 corresponde al 131 del actual régimen, que ha tenido en sus 38 años, indudablemente, una vigencia y una aceptación pacíficas.

Las provincias requieren —motu proprio— la cooperación federal en pro de un adecuado alojamiento de ciertos internos.

En consecuencia, también debemos apuntar respecto de este tipo de preocupación que cuando el Poder Ejecutivo envió el régimen actualmente vigente, en el párrafo que figura bajo el número 108 decía que el proyecto se inspira en el más escrupuloso respecto por los principios del federalismo, estableciendo relaciones de coordinación entre la Nación y las provincias y de éstas entre sí.

Por lo tanto, creo que esa preocupación está perfectamente cubierta con los fundamentos que he dado.

Con respecto a algunas objeciones más propias, yo hubiese preferido que la redacción de algunas normas fuese más operativa, tal como ha sucedido respecto de un proyecto de ley de encuentros familiares de los internos, aprobado en Diputados, que corresponde al expediente 1.425, D.-92, Orden del Día N° 1.412/93, donde decíamos que el derecho de encuentro familiar no podía ser limitado o restringido por motivos disciplinarios.

No obstante ello, el artículo 87 del proyecto que estamos tratando, dice que las sanciones disciplinarias no implicarán la suspensión total del derecho a visitas. Respecto de esa suspensión total, tengo la impresión de que el texto debiera haber sido más detallado u operativo para que no exista la posibilidad de que se produzcan otras interpretaciones.

Pero seguramente deberá interpretarse —y esto es importante decirlo— de acuerdo con el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos —incorporada, como dije, como norma constitucional mediante la reforma respectiva del año 1994—, en el sentido de que los derechos que puedan suspenderse o restringirse serán los que no afecten los derechos fundamentales del hombre.

Igualmente, y por último, señor presidente, este proyecto trata al personal penitenciario a partir del artículo 200 y subsiguientes, bregando por la capacidad y especialidad que hacen a la misión social que debe cumplir.

Sabemos que en la actualidad el personal de la Penitenciaría Federal tiene —y tendrá por algún tiempo— orígenes militarizados o castrenses

que son inconducentes respecto de la aplicación de la ley que vamos a sancionar.

Por ello, en ese proyecto que abarcaba una parte de los derechos que tenía el interno —me refiero al derecho de encuentros familiares—, habíamos dispuesto que la violación de los referidos derechos incluidos en la ley sería castigada de acuerdo con las reglamentaciones internas, no pudiendo el personal de ningún grado ampararse en la eximente de la obediencia debida.

Sin embargo, señor presidente, sabemos que por mínima que fuere la corrección que incorporásemos a esta norma, la iniciativa volvería a la Cámara de Diputados, y somos conscientes de que las leyes pueden ser buenas pero deben ser oportunas.

Por ello, el bloque de la Unión Cívica Radical, repitiendo aquello que dije anteriormente, de que la norma no es óptima pero es la mejor, acompañará la sanción del presente proyecto de ley.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes, bloque autonomista.

Sr. Romero Feris. — Señor presidente: he pedido el uso de la palabra para muy brevemente adelantar mi voto favorable con respecto a esta iniciativa tal como viene de la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios.

A su vez, deseo señalar que comparto la disidencia parcial manifestada por el señor senador Villarroel.

En ese sentido, quiero adelantar y fijar mi posición al respecto.

Sr. Presidente (Menem). — Esta Presidencia solicita a los señores senadores que están en sus despachos y que pueden escuchar el desarrollo de la sesión por el sistema de audio que se sirvan bajar al recinto para formar quórum.

En este momento sólo falta un señor senador para ello.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: ¿cuántos señores senadores hay en la casa?

Sr. Presidente (Menem). — Hay cuarenta y ocho señores senadores en la casa, señor senador.

— Se llama para formar quórum.

— Luego de unos instantes.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración en particular.

Sr. Branda. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Branda. — Señor presidente: atento a que se encuentra pendiente el tratamiento de muchos asuntos solicito que este proyecto sea votado por capítulos, salvo en aquellos puntos en donde exista un conflicto o alguna disidencia.

Baso mi pedido en el hecho de que esta iniciativa tiene más de doscientos artículos.

Sr. Presidente (Menem). — Si hay asentimiento, se procederá a votar en la forma requerida por el señor senador por Formosa.

— Asentimiento.

Sr. Presidente (Menem). — Como hay asentimiento, se votará por capítulos.

Si los señores senadores desean formular alguna observación, podrán hacerla en el momento oportuno.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en particular.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.

49

MANIFESTACIONES

Sr. Presidente (Menem). — Si los señores senadores se sirven permanecer en sus bancas, rápidamente podremos dar cuenta de todos los asuntos.

Sr. Branda. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Branda. — Señor presidente: voy a aprovechar la ausencia de quórum para solicitar la alteración del plan de labor.

Si bien ya se ha votado el plan de labor, hay un pedido de tratamiento sobre tablas efectuado por el señor senador Vaca con respecto a un proyecto de resolución por el cual se faculta a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que cite al señor intendente de la Capital a efectos de que informe sobre la situación económico financiera atento a los acontecimientos que son de dominio público.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

Sr. Berhongaray. — Señor presidente: voy a solicitar que se respete el plan de labor.

Hace seis sesiones que vengo solicitando el tratamiento de la emergencia financiera para el sector agropecuario y, por uno u otro motivo, cuando llega el momento de hacerlo, la cuestión se diluye por falta de quórum. Entonces, solicito que se respete el plan de labor aprobado.

Sr. Branda. — Está dentro del plan de labor.

Sr. Berhongaray. — Que se respete el plan de labor aprobado.

Sr. Figueroa. — ¡No se pongan nerviosos! (Risas.)

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. San Millán. — Señor presidente: solicito que en el proyecto de resolución por el que se cita al señor intendente de la Capital se agregue a la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

Sr. Presidente (Menem). — Se toma nota de lo solicitado por el señor senador.

Sr. Alasino. — Pido la palabra para una manifestación en minoría con respecto a la emergencia agropecuaria.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Alasino. — Señor presidente: con respecto al tema al que se ha referido el señor senador por La Pampa quiero decir que le hemos dedicado media hora de estudio en la reunión del bloque de hoy. Lo que pasa es que si no tenemos establecida la fuente de financiamiento referida a los pasivos agropecuarios, no podemos votar.

Como digo, esto lo discutimos hoy y, a sugerencia del presidente de la Comisión, nos ha parecido que lo más adecuado sería fijar una preferencia con despacho de comisión, comprometiendo de alguna manera a la Comisión de Presupuesto para que se expida ya que nos resulta imposible votar el proyecto en las actuales condiciones. Esta es la realidad. Se trata de un tema que nos interesa a todos. Hemos recibido a gente interesada en el tema porque queremos encontrar una forma de solucionarlo. Por eso entendemos que este es un motivo para que la comisión se expida y podamos votar el despacho.

Por estas razones, no acompañamos en este momento el proyecto del señor senador por La Pampa.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.